

Reporte
de Economía
y Desarrollo

Raíces del futuro

El nuevo mundo rural
de América Latina
y el Caribe

Resumen ejecutivo



BANCO DE DESARROLLO
DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE



Reporte de Economía y Desarrollo
Raíces del futuro
El nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe
Resumen ejecutivo

Depósito Legal: DC2026000214
ISBN: 978-980-422-350-1

© CAF 2026
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
Av. Luis Roche, Torre CAF Urb. Altamira, Caracas (Chacao) Miranda 1060, Venezuela
RIF: G200015470

Publicado bajo la Presidencia Ejecutiva de Sergio Díaz-Granados Guida y la Vicepresidencia Corporativa de Programación Estratégica de Christian Asinelli

Editor CAF

Dirección de Investigaciones Socioeconómicas-Gerencia de Conocimiento
Dirección de Comunicación Estratégica-Gestión Editorial

Edición

Ana Gerez

Diseño editorial

Estudio Bilder / Buenos Aires

Esta y otras publicaciones digitales disponibles en scioteca.caf.com

Acceso abierto bajo la licencia Deed - Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional - Creative Commons



Las ideas y opiniones expresadas en esta obra son las de los autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de CAF ni comprometen a la Organización. Los términos empleados y la presentación de los datos que en ella aparecen no implican toma alguna de posición de parte de CAF en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites.

En este reporte, todas las palabras relativas a cargos, ocupaciones, participantes, beneficiarios y otras denominaciones sobre personas engloban por igual a hombres y mujeres. Solo se hace una distinción entre ambos cuando la oposición de géneros es relevante en el contexto.

El papel del mundo rural en el desarrollo de América Latina y el Caribe

El desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe (ALC) está estrechamente vinculado al mundo rural, donde se concentran los recursos naturales, la producción de alimentos y gran parte de la energía que sostiene a la región. Con alrededor de 120 millones de habitantes, más de 18 millones de unidades productivas agropecuarias, el 22 % de la superficie boscosa global, el 50 % de la biodiversidad conocida y cerca del 60 % de los recursos mundiales de litio, estos territorios constituyen una base estratégica para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria¹. En las últimas décadas, varios sectores primarios han registrado fuertes aumentos de productividad, elevando la producción, posicionando a la región como líder en mercados internacionales de alimentos y minerales, lo que refuerza el aporte del mundo rural al desarrollo regional.

Los entornos rurales enfrentan también algunos de los rezagos sociales, económicos y ambientales más persistentes de la región. Muchos de estos desafíos se manifiestan con especial intensidad en estas zonas, limitando las oportunidades, el bienestar y la sostenibilidad ambiental. Esta doble realidad, de oportunidades y atrasos, convierte al mundo rural en un ámbito prioritario de la política pública. Reducir esos rezagos resulta fundamental para transformar su dinamismo productivo en desarrollo sostenible e inclusivo.

Esta edición del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- parte de la idea de que el desarrollo del mundo rural y el de la región son procesos

inseparables. Para lograr un crecimiento inclusivo, es necesario integrar a los territorios rurales en las estrategias nacionales de inversión e innovación y cerrar las brechas estructurales con las zonas urbanas. El reporte propone, por lo tanto, un cambio de paradigma: trascender la exclusiva dimensión agropecuaria e integrar la modernización agrícola y la diversificación económica, incluyendo los sectores no agrícolas, con su dimensión social, y promoviendo un desarrollo rural integral.

Desde una perspectiva productiva, los territorios rurales son una fuente fundamental de bienes y servicios estratégicos. En ellos se concentra el sector agropecuario, junto con una amplia gama de actividades vinculadas con la energía, la minería, la pesca, las actividades forestales y el turismo, que ganan peso en el contexto de la transición energética y ambiental.

Desde una perspectiva social, son un espacio de vida, identidad y pertenencia para millones de personas. Los hogares rurales son hoy más diversos que en el pasado, trascendiendo el estereotipo del agricultor o trabajador agropecuario. Pero también albergan comunidades campesinas, indígenas que gestionan recursos naturales y preservan la herencia cultural. El bienestar de la población rural se ve limitado por déficits de infraestructura, conectividad y servicios esenciales, así como por la presencia de economías ilegales y del crimen organizado². En conjunto, estos factores incrementan la vulnerabilidad de los territorios rurales y restringen sus oportunidades de desarrollo.

1 Las fuentes de los datos de población son Celade-División de Población de CEPAL y DPNU (2024); los de unidades productivas agropecuarias, FAO (2025a); los de superficie boscosa y biodiversidad, FAO (2021); y los de litio, USGS (2024).

2 Si bien estas actividades ilegales son cada vez más relevantes para los territorios rurales y el reporte reconoce su importancia, un análisis detallado excede su alcance. Para una discusión actualizada, véase Maloney et al. (2025).

El reporte examina las transformaciones económicas y demográficas de los territorios rurales, las fuentes de ingreso y empleo de sus hogares y las brechas persistentes en el acceso a servicios. A partir de esta evidencia, plantea que el aprovechamiento del potencial del mundo rural puede desempeñar un papel relevante en el progreso de la región, en la medida en que su transformación productiva vaya de la mano de una mayor inclusión social, sostenibilidad ambiental³ y cohesión territorial.

Este resumen ejecutivo se estructura en cinco bloques. Los dos primeros caracterizan los sectores productivos del mundo rural, identificando su potencial y sus principales desafíos, y distinguiendo entre el sector agropecuario y otros motores económicos estratégicos para el desarrollo territorial. El tercer bloque analiza las dinámicas demográficas y las condiciones de vida de los hogares rurales. El cuarto examina el acceso a servicios esenciales. Finalmente, el documento presenta una hoja de ruta de políticas orientada a avanzar hacia un modelo de prosperidad rural más inclusiva en la región.

³ El cambio climático es un desafío transversal para los sectores primarios y fue analizado en profundidad en ediciones anteriores del RED sobre el cambio climático y la biodiversidad y sobre la transición energética. Este reporte los complementa, enfocándose en las actividades productivas rurales y su aporte al desarrollo. Los impactos climáticos se abordan solo cuando condicionan estas dinámicas.

El sector agropecuario en el desarrollo productivo de la región

El sector agropecuario ha tenido, históricamente, un papel central en el desarrollo económico de ALC (Byerlee et al., 2008). Su importancia trasciende la producción primaria: articula una amplia red de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante (insumos, transporte, procesamiento industrial y servicios) y constituye la base de las exportaciones de la región, de su seguridad alimentaria y de buena parte del empleo rural. Aunque su peso relativo en el producto interno bruto y en el empleo ha disminuido, su papel estructural sigue siendo central. Por lo tanto, la modernización del agro es fundamental para impulsar transiciones productivas sostenibles, aumentar la resiliencia regional ante el cambio climático y mantenerlo como eje estratégico del desarrollo.

Durante las últimas siete décadas, América Latina ha experimentado una transformación profunda en la composición de su producción y empleo, en línea con el proceso de cambio estructural característico de las economías en desarrollo. A mediados del siglo XX, el

sector agropecuario concentraba cerca del 12 % del valor agregado y más del 50 % del empleo regional. Hoy representa, en promedio, el 6 % del PIB, valor que llega a casi el 10 % si se incluye el sector agroindustrial, y alrededor del 15 % del empleo total⁴.

Este descenso relativo, sin embargo, no implica una pérdida de relevancia. Por el contrario, el agro continúa siendo un componente central de las economías nacionales y un pilar de la inserción internacional de la región. En las últimas décadas, América Latina y el Caribe se ha consolidado como exportadora neta de alimentos, con un superávit comercial agropecuario elevado. En 2023, los productos agropecuarios y agroindustriales representaron alrededor del 22 % de las exportaciones regionales, frente a un promedio mundial cercano al 8 %, y la región aportó aproximadamente el 21 % de las exportaciones agropecuarias globales, consolidándose como uno de los principales proveedores globales de alimentos⁵.

Estructura productiva y formas de gestión: diversidad de escalas, sistemas y modelos de producción

La estructura productiva del sector agropecuario en ALC es sumamente diversa. En la región coexisten unidades productivas de muy distinta escala, que desarrollan actividades agrícolas y ganaderas bajo modelos

tecnológicos y formas de gestión variadas: desde grandes unidades productivas altamente mecanizadas hasta pequeños sistemas de agricultura familiar orientados al autoconsumo o al mercado local.

4 Cálculos propios utilizando la 10-Sector Database, de la Economic Transformation Database (RUG) (Kruse et al., 2022).

5 Cálculos propios con base en UNCTAD (2025a). En 1995, cuando comienza la serie de datos, las exportaciones de productos alimenticios representaban el 15 % de las exportaciones totales de la región y el 13 % de las exportaciones de alimentos mundiales.

El sector agropecuario es también muy diverso en términos de organización y producción a nivel global, y ALC ocupa una posición intermedia en este espectro. A nivel mundial, más del 70 % de las unidades productivas agropecuarias (UPA) tienen menos de 2 ha. En la región, la participación de este grupo de unidades es alta, aunque inferior a la observada en África o Asia y el Pacífico, mientras que las unidades de mayor escala, de más de 20 ha, tienen un peso relativamente más importante. Sin embargo, detrás de este promedio se esconden fuertes contrastes: el Caribe es la subregión con mayor proporción de UPA de menos de 2 ha, mientras que América del Sur presenta la menor (panel A del gráfico 1).

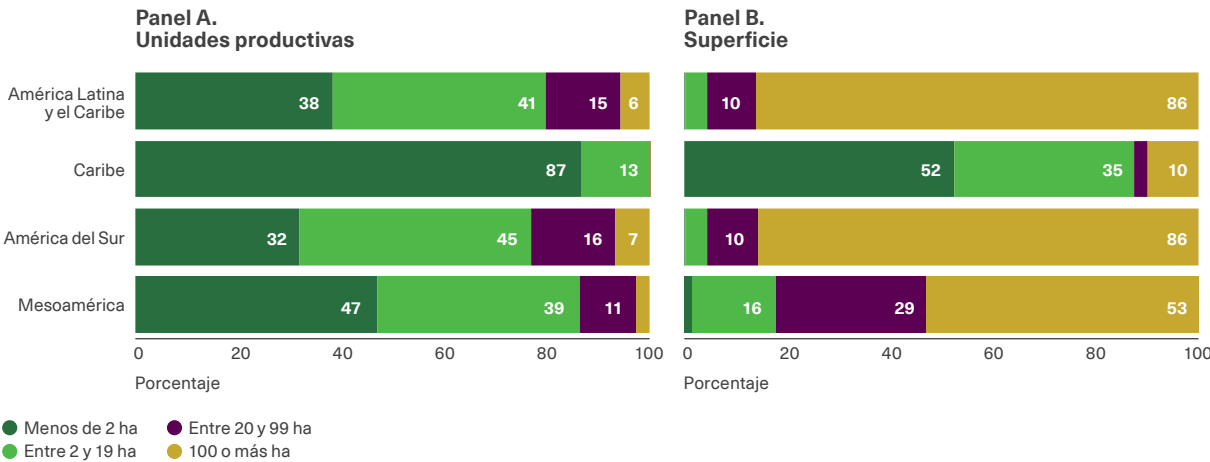
Incluso en las regiones donde predominan las unidades pequeñas, un porcentaje alto de la superficie total se concentra en grandes explotaciones, de más de 100 ha (panel B del gráfico 1). Solo en el Caribe se observa una situación más equilibrada en la participación de las distintas escalas. Parte de las diferencias en el tamaño promedio de las UPA se explica por la especialización productiva, ya que cada tipo de cultivo o actividad ganadera requiere distintas escalas de operación.

Los datos muestran, sin embargo, que incluso para una misma actividad existen disparidades marcadas

en el tamaño de las UPA entre países. Se observa una relación positiva entre el valor agregado agropecuario por trabajador y el tamaño promedio de las UPA, tanto en cultivos como en producción ganadera. Las diferencias en tamaño son especialmente visibles en granos, oleaginosas y ganado y más acotadas en frutales, cacao o café. En general, los países del Cono Sur cuentan con unidades de mayor escala, y esta diferencia no se explica únicamente por el tipo de actividad predominante, sino que aparece de manera sistemática en la mayoría de los sectores.

En los países de menores ingresos, la producción se caracteriza por una mayor presencia de la agricultura familiar, en particular de subsistencia, lo que se asocia con una distribución de las UPA más concentrada en unidades de pequeño tamaño. La agricultura familiar está extendida en toda la región y representa, en los países con información disponible, más del 75 % de las unidades productivas y, en la mayoría de los casos, más del 98 %. Los países con menos participación relativa de este tipo de agricultura son Argentina, Brasil y Uruguay, que cuentan con sectores agrícolas altamente desarrollados y grandes extensiones de tierra, además de Costa Rica.

Gráfico 1
Distribución de las unidades productivas agrícolas y de la superficie total según el tamaño de las UPA



Nota: Los valores corresponden al último año con información disponible para cada país en las últimas dos rondas del Censo Agropecuario Mundial (años 2010 y 2020).
Fuente: Elaboración propia con base en FAO (2025a).

¿Está la región aprovechando plenamente su dotación de recursos naturales?

Diversos análisis de este reporte convergen en una conclusión: ALC dispone de una dotación de recursos naturales favorable para las actividades agropecuarias, pero no siempre logra aprovecharla plenamente. Existen diferencias significativas entre países y entre regiones o sectores dentro de cada país, y la evidencia muestra que el sector aún tiene márgenes importantes para elevar su productividad.

Avanzar en esa dirección implica no solo aumentar el uso de los recursos empleados en la producción, en

particular el capital y los insumos intermedios, como fertilizantes y sistemas de riego, sino también mejorar su eficiencia y fortalecer la generación e incorporación de innovaciones tecnológicas. La búsqueda de una mayor eficiencia productiva cobra especial relevancia en un contexto global donde es indispensable compatibilizar el desarrollo agrícola con los objetivos de sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático.

Rendimientos agrícolas observados frente a potenciales

La tierra constituye un factor central para la producción agropecuaria. Las condiciones geográficas de cada país y su dotación de este recurso determinan, en gran medida, su capacidad productiva. Adamopoulos (2025) estima los rendimientos potenciales de las tierras actualmente destinadas a la producción agrícola en distintas partes del mundo. Utilizando modelos agronómicos y asumiendo la aplicación de un nivel tecnológico uniforme, el autor calcula la producción agrícola por hectárea que podría alcanzarse en cada región.

Los resultados indican que, en un escenario de baja inversión (de secano), con factores básicos de capital

y trabajo, el rendimiento potencial promedio de ALC sería aproximadamente un 20 % superior al de los países de altos ingresos. Esto resalta las ventajas comparativas de la región en dotación de recursos naturales y diversidad agroecológica.

Sin embargo, los rendimientos efectivos cuentan una historia distinta: la producción agrícola promedio por hectárea en ALC se sitúa alrededor de un 20 % por debajo del nivel observado en los países de altos ingresos. La región podría alcanzar rendimientos superiores, pero no logra materializar ese potencial.

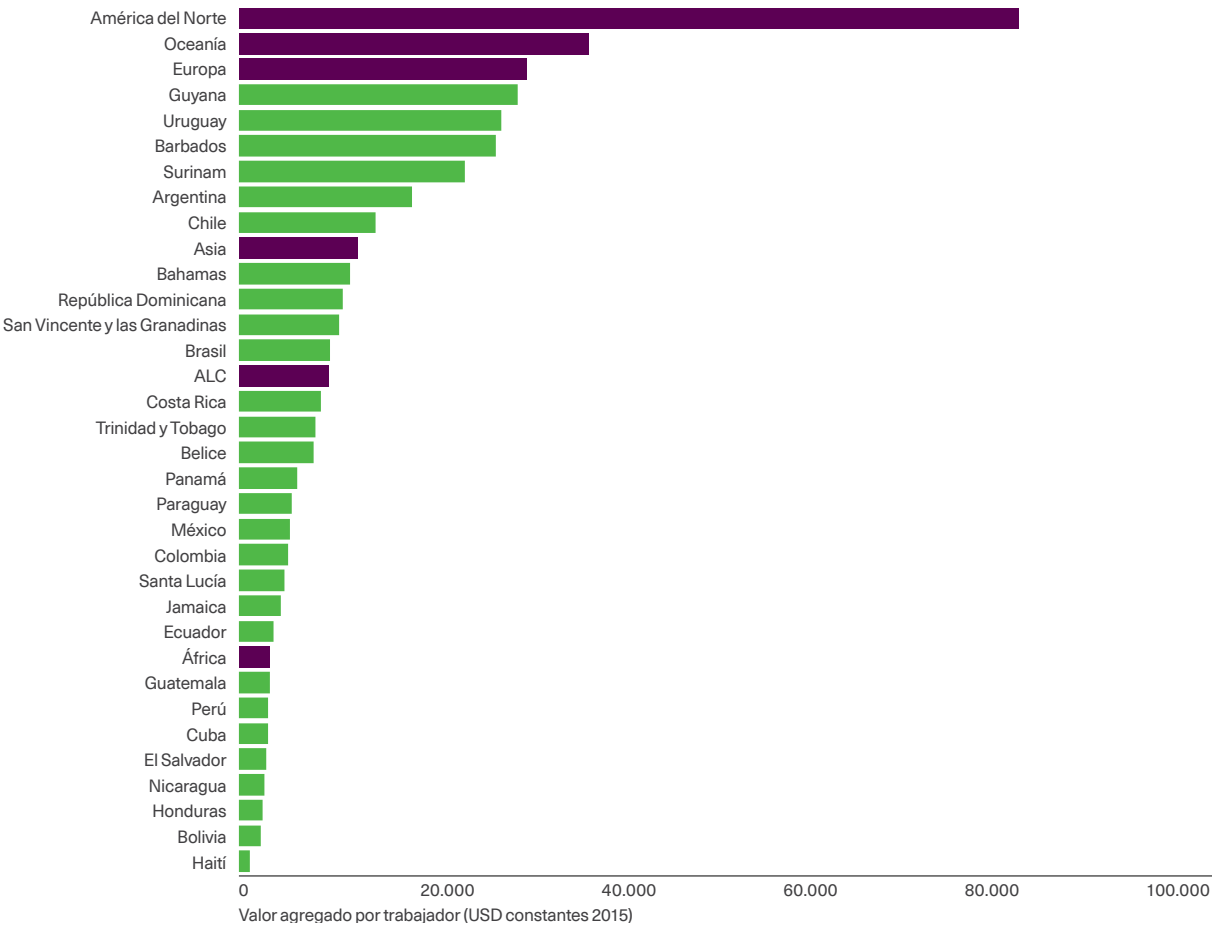
Productividad, dotación de factores y eficiencia en el uso de insumos

Las diferencias entre rendimientos potenciales y efectivos revelan brechas de productividad asociadas tanto a la cantidad de factores disponibles como a la eficiencia con que se usan. Analizar estas diferencias permite dimensionar el rezago estructural del sector agropecuario frente a economías más desarrolladas.

Las métricas de productividad laboral, definidas como valor agregado por trabajador, ilustran el desafío

(gráfico 2). En promedio, el valor agregado agropecuario por trabajador en ALC equivale a solo el 12 % del nivel observado en Estados Unidos, al 31 % del de Europa, al 26 % del de Oceanía y al 76 % del de Asia. El gráfico muestra que, en mayor o menor medida, todos los países de ALC presentan brechas de productividad con respecto a esas otras regiones del mundo, lo que resalta su potencial para seguir desarrollando su producción agropecuaria.

Gráfico 2
 Productividad laboral del sector agropecuario, promedio 2014-2023



Nota: Las barras representan el promedio para los años 2014-2023 del valor agregado por trabajador, en dólares constantes de 2015. Las barras violetas muestran los promedios regionales, mientras que las barras verdes muestran los valores para los países de ALC.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO (2025b, 2025c).

Las brechas de productividad laboral de ALC respecto de otras regiones pueden atribuirse a las menores dotaciones por trabajador de otros factores de producción, como la tierra y el capital, y al menor uso de insumos intermedios, pero también a diferencias en la eficiencia con que se combinan estos factores, reflejada en la productividad total de los factores (PTF). Este indicador captura efectos de diversa índole: progreso tecnológico, innovación, organización del trabajo, infraestructura, calidad institucional, escala de la operación y asignación de los recursos entre unidades productivas.

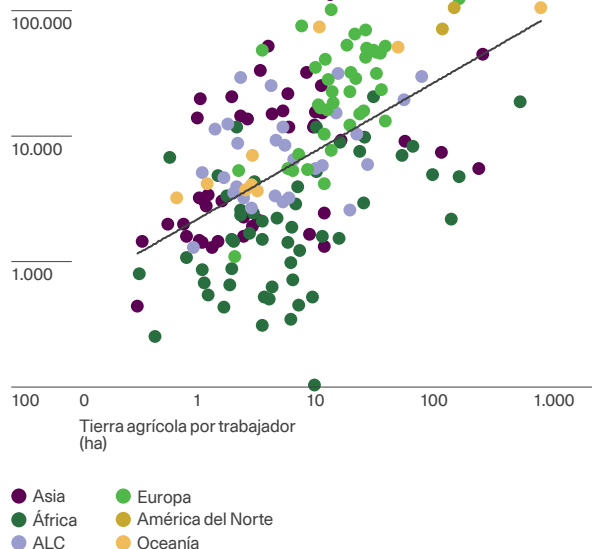
Los análisis realizados para este reporte indican que esta brecha de productividad es producto de diversos factores. Entre ellos está la cantidad de tierra y capital por trabajador, la cual se asocia positivamente con la productividad de los trabajadores (paneles A y B del gráfico 3). En efecto, ALC presenta, en promedio niveles bajos en ambas dimensiones. Un trabajador agropecuario en esa región dispone en promedio de unas 14 hectáreas (ha), equivalente al 9 % de la superficie por trabajador en Estados Unidos y alrededor del 20 % en la OCDE, mientras que el nivel de capital por trabajador es tan solo el 5 % de lo observado en Estados Unidos y el 6 % en la OCDE.

Gráfico 3

Dotación factorial y productividad laboral agrícola, promedio 2014-2023

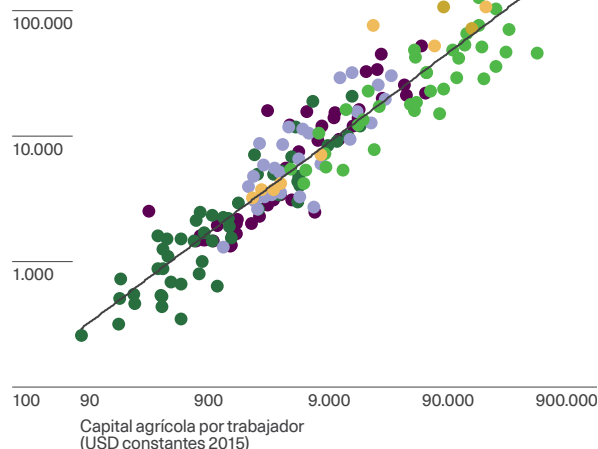
Panel A. Tierra por trabajador

Valor agregado por trabajador
(USD constantes 2015)



Panel B. Capital por trabajador

Valor agregado por trabajador
(USD constantes 2015)



Fuente: Elaboración propia con base en datos de FAO (2025b, 2025c, 2025d, 2025e).

Evolución de la producción agropecuaria y la productividad

Aunque la productividad agropecuaria de ALC muestra brechas respecto de las economías más avanzadas, el crecimiento de la producción ha sido notable. En las últimas seis décadas, el valor de la producción agropecuaria de la región se multiplicó por cinco, equivalente a una tasa de crecimiento anual promedio del 2,8 %, un valor superior al promedio mundial. Como resultado, la participación regional en la producción agropecuaria global aumentó del 9 % en 1961 al 12 % en 2022⁶.

El crecimiento fue muy heterogéneo entre países. En Brasil, la producción se multiplicó por un factor de ocho; en Mesoamérica y el Grupo Andino⁷, por 5,5 y 5,8, respectivamente; en el Cono Sur, por 3,7; y en el Caribe, por 1,9. A nivel nacional, además de Brasil, destacan los casos de Guatemala, Bolivia, Belice y Costa Rica, donde la producción agropecuaria se expandió entre siete y nueve veces.

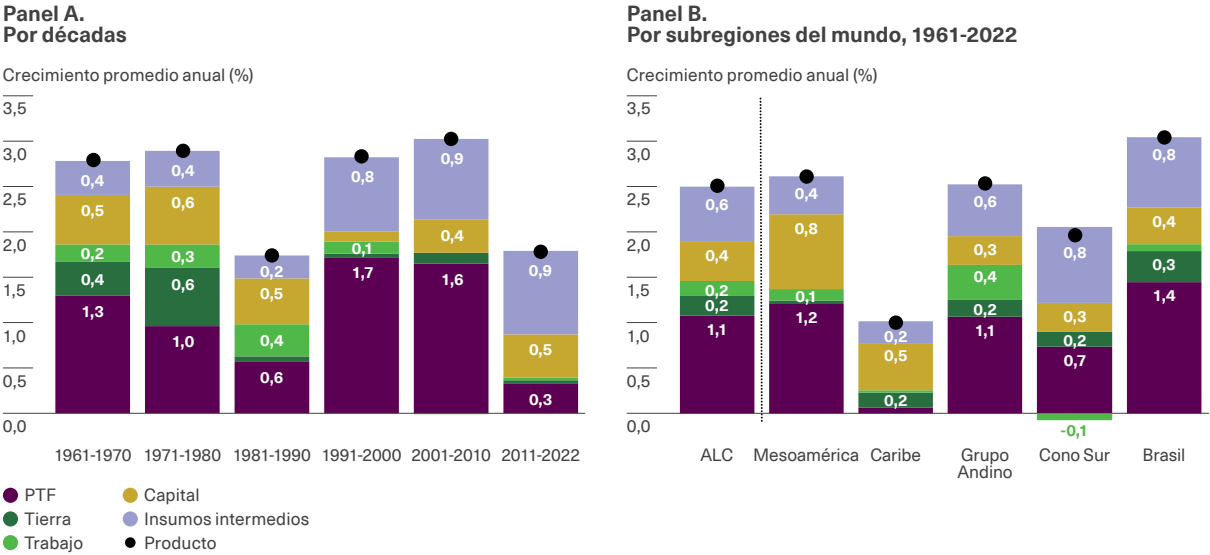
6 Estas cifras son obtenidas a partir de los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), que incluyen el valor total de la producción agrícola, animal y de acuicultura utilizando precios agrícolas mundiales constantes de 2015, en miles de dólares a paridad de poder adquisitivo (PPA).

7 Bajo esta denominación se incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y se excluye a los países andinos que pertenecen al Cono Sur (Chile y Argentina).

Este avance se sustentó en un proceso de modernización que combinó expansión del uso de insumos y mejoras tecnológicas, con ritmos distintos en los diferentes períodos. Como muestra el panel A del gráfico 4, entre 1960 a 1990, el crecimiento de la producción se explicó fundamentalmente por la ampliación de la frontera agrícola (tierra) y el aumento en la utilización de insumos (trabajo, capital e insumos intermedios⁸). A partir de los años noventa, el motor del crecimiento comenzó a desplazarse hacia la productividad total de los factores (PTF), impulsada por las innovaciones en biotecnología, la mecanización y la gestión, hasta 2010, cuando la contribución de la PTF se redujo nuevamente.

El panel B del gráfico 4 muestra los resultados para el promedio y por subregiones de ALC en el periodo 1961-2022. En el Caribe, la contribución de la PTF fue marginal: el crecimiento se explicó principalmente por el capital (53 %), seguido de los insumos intermedios (23 %) y la expansión de tierras (17 %). En el Cono Sur, los insumos intermedios fueron el principal motor (42 %), aunque la PTF también tuvo un aporte relevante (38 %). En Mesoamérica, la acumulación de capital explicó casi un tercio del crecimiento, duplicando el aporte de insumos intermedios, mientras que la PTF representó el 46 %. En el Grupo Andino destaca el rol del trabajo, con una contribución del 15 %, superior a la del capital (12 %).

Gráfico 4
Contabilidad del crecimiento del producto agropecuario en América Latina y el Caribe, 1961-2022



Sectores estratégicos no agropecuarios: nuevos motores del desarrollo rural

La riqueza natural de ALC ofrece ventajas comparativas no solo para la agricultura, sino también para otros sectores que son importantes para el mundo rural. Por un lado, la región cuenta con abundancia de minerales críticos para la transición energética, reservas de hidrocarburos y enormes

potenciales de generación de combustibles bajos en carbono a precios competitivos. Por otro lado, los bosques, la pesca, la acuicultura y el turismo son sectores que permiten diversificar las fuentes de ingresos rurales, generar empleo local y fortalecer la seguridad alimentaria rural.

Los sectores estratégicos para la transición energética

El mundo rural de ALC ocupa una posición estratégica en el contexto de la transición energética global, dada su abundancia de recursos naturales, como los minerales críticos, y sus condiciones favorables para la producción de combustibles bajos en carbono, como el hidrógeno verde y azul, o biocombustibles. Los países de la región pueden aprovechar la reconfiguración de los mercados energéticos para

promover el desarrollo sostenible de la industria minera y energética. Al mismo tiempo, esta oportunidad de inserción en los mercados globales permitiría diversificar los ingresos de las poblaciones rurales, aunque su peso en el empleo es limitado, y utilizar las rentas derivadas de estas actividades para mejorar sus condiciones de vida.

Recursos estratégicos para la transición energética

A medida que avanza la transición energética a nivel mundial, aumenta la demanda de energías renovables no convencionales y alternativas a las tecnologías tradicionalmente contaminantes. Consecuentemente, crece la demanda de minerales críticos necesarios para la fabricación de los insumos con los que se elaboran, por ejemplo, paneles solares, baterías y sistemas eléctricos. Algunos países de ALC ya son líderes mundiales en la extracción, exportación y reserva de varios de estos minerales. Chile, México y Perú concentran

el 45 % de la producción global de cobre, mientras que el llamado Triángulo del Litio, formado por Chile, Argentina y Bolivia, reúne más del 60 % de los recursos mundiales de ese metal (AIE, 2025; Valencia et al., 2025).

Además de los minerales críticos, ALC dispone de vastos recursos de hidrocarburos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, representando el 17 % de las reservas globales (AIE, 2023b). Sin embargo, la descarbonización progresiva del sistema energético mundial obliga a diversificar la matriz productiva y preparar economías dependientes del petróleo para afrontar escenarios de menor demanda. En este contexto, el gas natural, también abundante en la región, emerge como un recurso de transición por su menor intensidad de emisiones y su papel en la producción de hidrógeno azul.

Los biocombustibles y el hidrógeno verde constituyen alternativas para sectores difíciles de

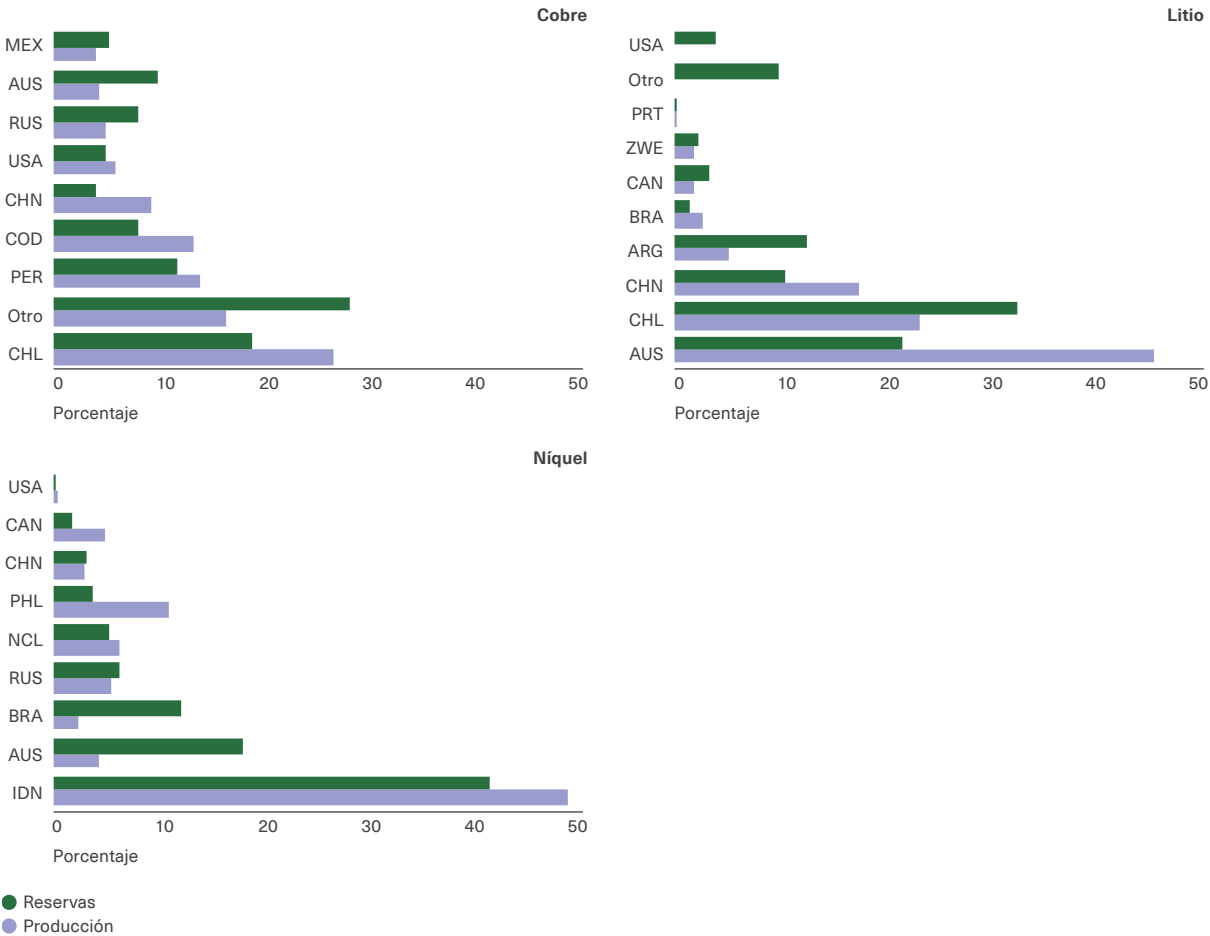
electrificar, como el transporte pesado y la industria. ALC también cuenta con ventajas comparativas en estos ámbitos. Por un lado, al ser una región predominantemente agrícola, existe un gran potencial de producción de biocombustibles, utilizando desechos y residuos resultantes de la actividad. Por otro lado, cuenta con amplio acceso a agua dulce (FAO, 2025f) y zonas con gran capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables no convencionales (Banco Mundial et al., 2025a, 2025b), insumos fundamentales para la producción eficiente de hidrógeno verde. Así, ALC se posiciona con los menores costos proyectados de producción de hidrógeno verde a nivel global (AIE, 2024).

La importancia de los sectores extractivos para ALC

Los sectores extractivos desempeñan un papel estratégico en algunas economías de ALC. Estos sectores representan en promedio el 4 % del PIB regional, aunque su peso varía considerablemente entre países. Las reservas y producción de minerales críticos tienen especial relevancia para los países andinos y en cierta medida para Brasil (gráfico 5), mientras que los hidrocarburos dominan en los países del norte de América del Sur, como Venezuela y Guyana. En Centroamérica y el Caribe, la escala es significativamente menor. En dichas regiones existen igualmente recursos mineros relevantes, como el oro, la bauxita o el cobre, que generan divisas y actividad económica.

Los sectores extractivos constituyen, además, una fuente clave de ingresos fiscales nacionales y subnacionales, contribuyendo al financiamiento de las políticas públicas y los proyectos de desarrollo local. En minería, estos ingresos pueden ser superiores al 2 % del PIB, como en el caso de Chile en 2023, mientras que en petróleo y gas alcanzaron en 2023 cifras cercanas al 10 % en países como Ecuador (7,6 %) y Trinidad y Tobago (11,6 %). No obstante, su contribución al empleo es muy baja, inferior al 2 % en la mayoría de los países, lo que refleja su alta intensidad de capital. En cuanto a las exportaciones, se puede observar en el gráfico 6 el gran peso que tienen los hidrocarburos tradicionales en países como Guyana y Venezuela, mientras que en el caso de la minería destaca Chile, donde los productos mineros representan el 20 % de sus exportaciones totales.

Gráfico 5
Participación en la producción y las reservas de cobre, litio y níquel global, 2023



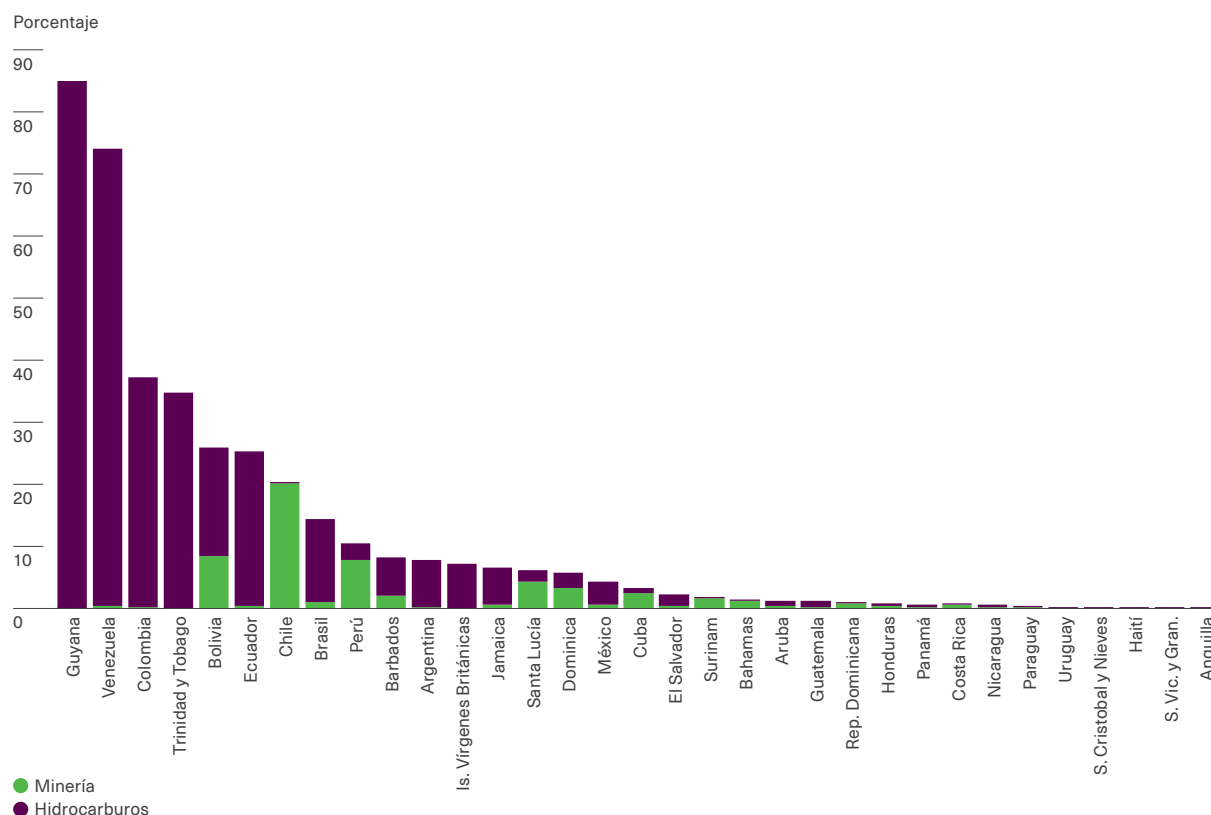
Nota: Los datos de reservas no incluyen a Bolivia. Este ha sido identificado como el país con mayores recursos de litio del mundo, pero aún no se consideran susceptibles de ser explotados por razones económicas, técnicas o legales (USGS, 2024)
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Ritchie y Rosado (2024).

Dentro del sector minero persisten importantes heterogeneidades. La minería a gran escala, en manos de grandes corporaciones, ofrece mejores salarios y condiciones laborales, pero absorbe poca mano de obra. En contraste, la minería artesanal y de pequeña escala genera proporcionalmente más empleo, aunque en condiciones precarias, informales y en muchos casos inseguras. Las mujeres representan solo alrededor del 10 % de los puestos de trabajo, aunque

su participación ha crecido lentamente, impulsada por las políticas de equidad de género y por la modernización tecnológica, que mejora las condiciones laborales y alivia algunas tareas de gran esfuerzo físico. Sin embargo, estas trabajadoras enfrentan persistentes barreras culturales, discriminación y una marcada desigualdad en los ingresos, especialmente en la minería artesanal, donde las condiciones son más adversas.

Gráfico 6

Participación de la minería y los hidrocarburos en las exportaciones, 2023



Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNCTAD (2025b).

Minerales críticos, gobernanza, sostenibilidad y mirada de largo plazo

Según la AIE (2025), la demanda de litio podría multiplicarse por 5 hacia 2040, mientras que la de cobre seguirá siendo la mayor entre los minerales críticos. Sin embargo, aprovechar las oportunidades derivadas del aumento de la demanda de estos minerales enfrenta dos desafíos principales. Por un lado, es preciso garantizar la sostenibilidad de la minería. ALC es la región con más denuncias de impactos ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las comunidades locales (AIE, 2023a), y esto se ha evidenciado con la proliferación de conflictos mineros en Chile, Perú y Bolivia (Lagos et al., 2023). Por otro, hay que asegurar marcos legales y normativos, así

como estabilidad política y macroeconómica, que permitan viabilizar proyectos de largo plazo con grandes inversiones iniciales. Un ejemplo son los proyectos de litio de salmuera. Este proceso es intensivo en capital, con costos iniciales que pueden oscilar entre USD 300 millones y USD 900 millones y tiempos estimados de 5 a 12 años.

Desarrollo de la cadena de valor del litio

Si bien ALC se posiciona como un actor central en la producción de litio gracias a la abundancia de reservas en salmuera, el escenario global está cambiando rápidamente. El descubrimiento de reservas de roca dura⁹ en otras economías del mundo y la aceleración de la producción en esos yacimientos erosionan el dominio de ALC y diversifica la oferta del litio.

Para no perder pie en estos mercados, ALC debe avanzar en la cadena de valor del litio, particularmente en la refinación y en la producción de baterías (CEPAL, 2023; López et al., 2019). La industria de refinación tiene plazos de desarrollo más cortos y genera más empleo y valor agregado que la mera extracción. Inversiones adicionales podrían abrir

oportunidades de crecimiento y diversificación económica, mediante el desarrollo de capacidades locales de procesamiento y la producción de componentes para tecnologías de energía limpia (AIE, 2023a). Países de la región, como Chile, ya han avanzado en esta dirección, financiando investigación y desarrollo vinculados a la industrialización del litio (CEPAL, 2023). Los desafíos que se deben sortear para desarrollar las actividades de refinación y transformación de minerales críticos son el acceso limitado a tecnología y habilidades especializadas, la falta de competitividad en costos, la ubicación de la demanda y las barreras de mercado para nuevos participantes (AIE, 2023a).

Combustibles bajos en carbono

Los combustibles bajos en carbono representan otro eje estratégico para la región, destacándose el hidrógeno (verde y azul) y los biocombustibles. El hidrógeno verde, producido mediante electrólisis del agua utilizando energías renovables, se perfila como una opción clave para la descarbonización del transporte y la industria pesada. América Latina posee condiciones excepcionales para su producción gracias a su disponibilidad de agua dulce y potencial de generación eléctrica renovable. Se estima que la región podría cubrir hasta el 50 % de la demanda global en escenarios de cero emisiones netas en 2050 (AIE, 2024). Sin embargo, su despliegue depende de inversiones significativas, una regulación hídrica adecuada y el acceso a financiamiento. El hidrógeno azul, producido principalmente a partir de gas natural con captura de carbono, surge como una alternativa para aquellas regiones con grandes reservas de este hidrocarburo.

El hidrógeno y sus derivados, como el amoníaco y el metanol, tienen el atractivo de ser vectores energéticos versátiles, que pueden ser utilizados

como combustibles aéreos, marítimos o terrestres, así como para la generación de calor en procesos industriales de difícil descarbonización, como la industria acerera o cementera. También permiten almacenamiento de energía, aunque su manipulación y transporte plantean desafíos tecnológicos.

En paralelo, los biocombustibles siguen siendo un pilar en la transición energética. Brasil lidera la producción regional, aportando el 20 % del etanol mundial y demostrando cómo la política pública puede impulsar la adopción masiva de combustibles renovables. Otros países, como Argentina y Colombia, han avanzado con políticas de mezcla obligatoria de etanol y biodiésel. El uso de residuos agrícolas para generar biogás o biometano constituye una oportunidad adicional para diversificar ingresos rurales y reducir emisiones.

El potencial de los biocombustibles, como el biogás y el biometano, es significativo, ya que pueden sustituir directamente a los combustibles fósiles en el transporte, generar electricidad y calor,

⁹ La extracción del litio en reservas de roca dura se realiza utilizando técnicas de minería tradicional, lo que implica costos y tiempos de desarrollo significativamente menores que la extracción en salmuera. La mayor parte de las reservas de litio de ALC se encuentra en salmueras.

inyectarse en redes de gas natural y ser producidos aprovechando los residuos agrícolas, impulsando encadenamientos locales y generando nuevos ingresos rurales. Sin embargo, su desarrollo enfrenta limitaciones vinculadas al acceso al financiamiento,

la capacidad técnica de las entidades crediticias para evaluar proyectos de energía limpia y la falta de datos confiables, lo que dificulta la transparencia y el acceso al crédito necesarios para su expansión.

El aporte de la transición energética al desarrollo local

La transición energética puede generar impactos directos sobre el bienestar rural. La expansión de las energías renovables distribuidas, como los paneles solares residenciales, permite electrificar comunidades aisladas sin requerir grandes inversiones en redes y explica en parte el crecimiento del acceso a la energía eléctrica en los hogares rurales de ALC. Esto favorece la inclusión energética, la productividad agrícola y la educación rural, entre otros beneficios. En paralelo, la sustitución de la biomasa por electrodomésticos de gas natural o electricidad en la cocina y calefacción reduce la contaminación del aire en los hogares, mejorando la salud pública (Allub et al., 2024).

Los sectores extractivos, aunque de baja intensidad laboral, ofrecen empleos mejor remunerados que el promedio rural. No obstante, los beneficios locales dependen de la capacidad de las empresas para integrarse con las economías locales y de la eficacia de los mecanismos de redistribución, como las regalías y los fondos de desarrollo. Experiencias en Perú y Colombia muestran que las transferencias pueden estimular la inversión pública y reducir la pobreza rural si se acompañan de instituciones sólidas y mecanismos de transparencia.

Diversificación productiva y desarrollo rural

La dotación natural de ALC sustenta una diversidad de actividades productivas vinculadas a sus recursos naturales, como lo son las actividades forestales, la

pesca, la acuicultura y el turismo. Estas actividades sostienen medios de vida, generan ingresos y proveen de alimentos a los pobladores locales.

Sector forestal

Las actividades del sector forestal tradicional que predominan en el mundo rural de ALC se dividen entre las madereras, que incluyen la silvicultura y extracción de madera, la manufactura de madera, y la celulosa y el papel; y no madereras, que comprenden productos como las resinas, los frutos, el caucho o las plantas aromáticas. En conjunto, el sector aporta alrededor del 0,8 % del PIB regional y genera el 0,9 % del empleo total. Este está marcado por un alto nivel de informalidad (aproximadamente el 77 % del

empleo en el sector) y una baja participación femenina (menos de un cuarto del empleo). La conservación forestal ha impulsado nuevos negocios basados en la naturaleza, que aprovechan los recursos y servicios de los bosques de forma sostenible para generar ingresos, como los créditos de carbono. La conservación forestal, además, proporciona beneficios para la agricultura, incluyendo la regulación hídrica, el control de la erosión, la polinización y la fertilidad del suelo.

ALC cuenta con cerca de 935 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 22 % de la superficie boscosa mundial, de los cuales un 98 % son bosques primarios o naturalmente regenerados (FAO, 2024a). La región ha experimentado el mayor crecimiento global en plantaciones forestales (195 % entre 1990 y 2022), con 22,5 millones de hectáreas plantadas, concentradas en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Esta expansión se apoya en la alta productividad:

rendimientos de especies como eucaliptos o pinos superan ampliamente los de países europeos o norteamericanos, con tasas internas de retorno que oscilan entre el 12 % y el 22 %. Estos resultados reflejan la ventaja comparativa de la región y su potencial para atender el crecimiento de la demanda mundial de productos forestales sostenibles, proyectado en el 37 % hasta 2050.

Pesca y acuicultura

La pesca y la acuicultura son esenciales para la seguridad alimentaria, el empleo y la resiliencia de las comunidades costeras y ribereñas. La acuicultura regional es un sector dinámico: pasó de representar el 2,6 % de la producción mundial en 2000 al 4,6 % en 2022, el crecimiento más alto a nivel global (FAO, 2024b).

Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú concentran el 90 % del valor y volumen exportado de productos de la pesca y acuicultura regional. Chile y Ecuador lideran con exportaciones de salmón, trucha, mejillones y camarones, mientras que Perú mantiene una posición dominante en harina y aceite de pescado. En Centroamérica y el Caribe, la producción se orienta al mercado interno, pero las exportaciones de productos de alto valor, como salmón, camarones, langostinos o atún, representan una fuente significativa de divisas.

Más de dos millones de personas trabajan directamente en el sector, con un número estimado similar o mayor en actividades conexas, como el procesamiento, el transporte y la comercialización. Entre el 40 % y el 90 % del empleo poscaptura corresponde a mujeres, lo que resalta el papel del sector en la inclusión

económica femenina. La pesca artesanal constituye el 90 % de las unidades productivas y el 40 % de la producción total, siendo esta actividad fuente de empleo predominantemente rural, desempeñado por familias o cooperativas locales. En términos culturales, la pesca artesanal preserva conocimientos ecológicos tradicionales y prácticas ancestrales. Además de ser una fuente de ingresos para las comunidades pesqueras, los productos de la pesca y la acuicultura son alimentos de alto valor nutritivo.

El consumo per cápita de animales acuáticos de ALC es de los más bajos del mundo, cercanos a los niveles de África, con la excepción de unos pocos países de tradición gastronómica pesquera, como Perú. Las posibilidades de expansión de la demanda interna es otra fuente de oportunidades para el sector.

La sobreexplotación y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) constituyen los principales desafíos del sector pesquero. En el Pacífico Sur, solo un tercio de las poblaciones marinas están dentro de niveles sostenibles, la cifra más baja de todas las subregiones. Las pérdidas económicas para la región por pesca ilegal ascienden a más de USD 2.300 millones anuales.

Turismo

El turismo es un sector dinámico, con gran potencial para la diversificación económica de los territorios rurales y costeros. Su peso en ALC es heterogéneo: en los países del Caribe puede superar el 20 % del

PIB, mientras que en los países continentales tiene menos participación, pero un gran potencial impacto local. El crecimiento sostenido de la demanda en el subsector de turismo de naturaleza y cultural lo

vuelve incluso más prioritario para las zonas rurales, abriendo oportunidades, como el turismo rural comunitario, que permite vincular la conservación ambiental con la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido social.

La región cuenta con abundantes recursos naturales, rica biodiversidad y un enorme patrimonio cultural, lo que la vuelve especialmente atractiva para el turismo natural y cultural. Países como Costa Rica se destacan como modelos exitosos en ecoturismo, combinando políticas de conservación con desarrollo económico, gracias a instrumentos como los pagos por servicios ambientales y el fortalecimiento de áreas protegidas. Diversos programas de turismo rural en Bolivia, Ecuador, México y Perú han demostrado que el turismo comunitario puede generar ingresos complementarios, especialmente para mujeres y jóvenes, y mejorar la percepción del valor de los recursos naturales. Estas iniciativas fomentan además la revalorización cultural y el fortalecimiento de la gobernanza local.

Población y hogares rurales en transformación

El mundo rural de ALC atraviesa una transformación demográfica y territorial acelerada. Su peso relativo en la población total desciende y, en muchos países, también su tamaño absoluto. Paralelamente, áreas antes rurales dejan de serlo por el crecimiento poblacional y la mayor densidad. La transición demográfica, con caídas de la fecundidad y el envejecimiento de la

población, modifica la composición etaria y reconfigura las necesidades de los hogares, mientras que los flujos migratorios tradicionales de salida se atenúan y conviven con movimientos hacia entornos rurales. El reporte documenta estos procesos con una perspectiva de largo plazo, actualizando y ampliando la evidencia disponible¹⁰.

La población rural

La población rural de ALC en 2025 se estima en unos 120 millones de personas bajo las definiciones nacionales vigentes (Celade-División de Población de la CEPAL y DPNU, 2024). Su peso relativo ha disminuido de manera sostenida, pasando de más del 50 % de la población total en 1950 a cerca del 18 % actual. Las proyecciones indican que esta participación seguirá cayendo en las próximas décadas (panel A del gráfico 6). No obstante, si se utiliza la metodología

de grado de urbanización (DEGURBA, por sus siglas en inglés), que aplica parámetros homogéneos para todos los países, la población rural asciende a unos 100 millones (15 % del total), cifra algo menor que la surgida de las estadísticas oficiales (Schiavina et al., 2023). Según este criterio, la mitad vive en aldeas rurales (asentamientos pequeños con cierta densidad), mientras que la otra mitad se encuentra en zonas dispersas o mayormente deshabitadas¹¹.

Transición demográfica

La transición demográfica avanza con rapidez en las zonas rurales. Aun cuando la magnitud y el ritmo con el que disminuye el peso de la población rural difieren

entre países, la evolución demográfica en áreas rurales sigue patrones similares en toda la región. En 1950, la pirámide poblacional mostraba una base

10 Las fuentes tradicionales, como las proyecciones del Celade-División de Población de la CEPAL y DPNU (2024), se complementan con procesamiento propios de censos (1970-2020), la base Migración Interna de América Latina y el Caribe (MIALC) (Celade-División de Población de la CEPAL, s. f.) y los indicadores armonizados de encuestas de hogares de CEDLAS (2025) para el seguimiento socioeconómico (2003-2023), cubriendo un total de 22 países. Allí donde la información lo permite, se complementa el análisis de la tradicional dicotomía entre espacios rurales *versus* urbanos, con una aproximación al continuo rural-urbano basado en la metodología de grado de urbanización (DEGURBA, por sus siglas en inglés) (Comisión Europea et al., 2024).

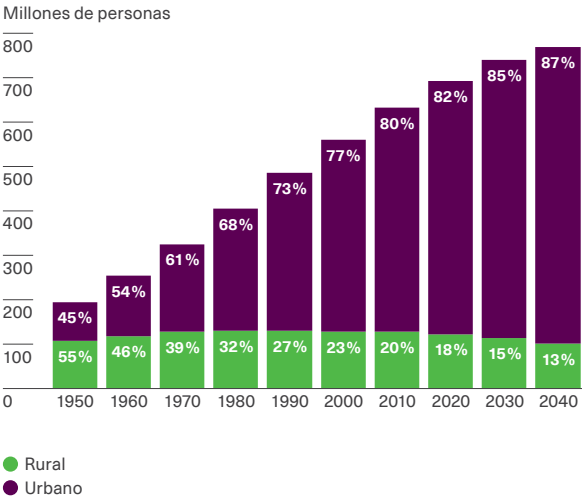
11 La clasificación DEGURBA distingue tres categorías territoriales: ciudades, pueblos y áreas semidensas y áreas rurales. Dentro de estas últimas, suele diferenciarse entre aldeas rurales y zonas rurales dispersas o mayormente deshabitadas.

ancha, reflejo de las elevadas tasas de natalidad, y un estrechamiento progresivo en los grupos de mayor edad, lo que se asociaba a menores niveles de longevidad. En contraste, la pirámide poblacional

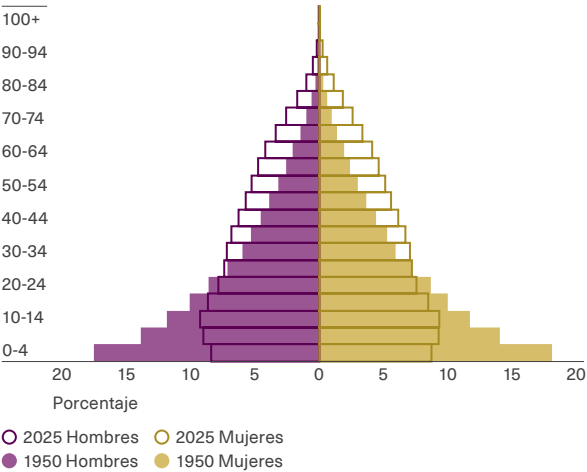
actual exhibe una base más estrecha y una mayor proporción de personas en edades adultas (panel B del gráfico 7). Estos patrones son, a su vez, similares a los de las áreas urbanas.

Gráfico 7
Población rural en América Latina y el Caribe

Panel A.
Población total y peso de la población rural en América Latina y el Caribe, décadas 1950-2040



Panel B.
Distribución por edad y sexo, 1950 y 2025



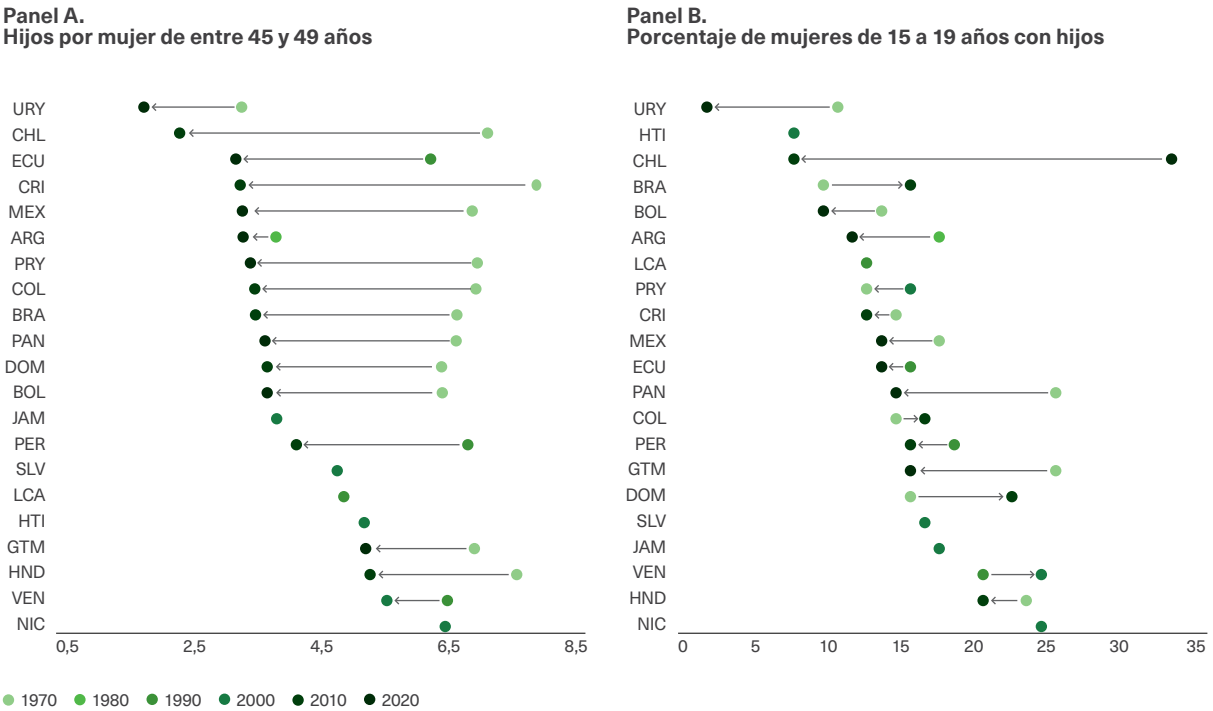
Nota: El panel B muestra el promedio simple calculado con datos de 20 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
Fuente: Elaboración propia con base en datos de UNDESA (2019) y Celade-División de Población de la CEPAL y DPNU (2024).

Fecundidad

Históricamente, las tasas de fecundidad han sido más altas en las zonas rurales que en las urbanas. En las décadas de 1970 y 1980, las mujeres rurales de 45-49 años tenían, en promedio, entre 6 y 8 hijos, salvo en Argentina y Uruguay (4 y 3) (panel A del gráfico 8). La fecundidad cayó de manera gradual en todos los países. En el caso de las mujeres rurales del mismo rango etario en las décadas de 2010 y 2020, el número de hijos se situaba entre 3 y 5, con la excepción de Uruguay (2 hijos). Con estas tendencias, las brechas de fecundidad entre zonas rurales y urbanas se han ido cerrando.

El embarazo adolescente constituye uno de los desafíos más persistentes en la región e incluso en ascenso en las últimas décadas del siglo pasado, pero la tendencia pareciera estar cambiando en años recientes. Entre un 10 % y un 34 % de las mujeres rurales de entre 15 y 19 años en las décadas de 1970 y 1980 había sido madre (panel B del gráfico 8). Este porcentaje comenzó a reducirse consistentemente en todos los países desde principios del siglo XXI y, en algunos de ellos, a un ritmo más acelerado en la última década. En las décadas de 2010 y 2020, los valores variaban entre un 2 % y un 23 %.

Gráfico 8
 Cantidad de hijos por mujer y maternidad adolescente en zonas rurales de países de América Latina y el Caribe, décadas 1970-2020



Nota: Los datos reportados provienen del primer y último censo de población disponible para cada país, entre las décadas de 1970 y 2020, con información sobre el número promedio de hijos nacidos vivos por mujer.

Fuente: Elaboración propia con base en datos censales procesados por Barnes y de la Mata (2025).

Composición etaria y étnica de la población rural

El avance del envejecimiento poblacional se manifiesta con fuerza en las áreas rurales. La proporción de personas mayores de 65 años ya llega a los niveles de las zonas urbanas, alcanzando un 10 %, y sigue en aumento. Si bien el envejecimiento es generalizado en toda la región, su impacto puede ser más profundo en el ámbito rural al plantear desafíos específicos para la provisión de servicios de salud y cuidados.

Otro aspecto que caracteriza a la población rural y que se mantiene en el tiempo es la sobrerrepresentación de la población indígena, una situación que no se replica de manera sistemática en el caso de la población afrodescendiente. En particular, a medida que aumenta el grado de ruralidad de los municipios o las unidades administrativas subnacionales equivalentes, también lo hace la proporción de población indígena.

Patrones migratorios

La migración sigue siendo un componente central del cambio demográfico rural en ALC, pero sus dinámicas han cambiado de forma notable. La histórica emigración del campo hacia las grandes ciudades perdió intensidad y dio paso a una movilidad más diversa: retornos, migración circular y desplazamientos hacia municipios intermedios. Aunque persisten diferencias entre países, la mayoría muestra una desaceleración de las tasas de emigración rural tanto en números absolutos como relativos¹².

Según los datos más recientes, en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú se registran los niveles más elevados de emigración rural (cantidad de personas que salen respecto a la población rural de origen), con tasas que en algunos casos alcanzan o superan el 2 % anual de la población rural total. En el extremo opuesto, países como Cuba, El Salvador y México presentan tasas de salida más moderadas, en torno al 1 % anual, probablemente porque sus picos migratorios ocurrieron hace más tiempo y debido también a la relevancia de la migración internacional, cuya magnitud no puede ser medida adecuadamente con la información censal disponible. En términos generales, el flujo migratorio desde los municipios rurales ha experimentado una desaceleración en los últimos años (Rodríguez Vignoli, 2017). Considerando la tasa de emigración rural, la evolución muestra una tendencia a la baja en la mayoría de los países.

Al mismo tiempo, los saldos migratorios netos rurales muestran descensos aún más pronunciados, reflejando no solo una menor salida, sino también una expansión de los flujos de retorno. Esto sugiere que, aunque persiste la movilidad, los desplazamientos de ida y vuelta se ha intensificado, lo que puede estar reflejando transformaciones en los patrones de residencia, vínculos más flexibles entre el campo y la ciudad o limitaciones crecientes para asentarse de forma permanente en zonas urbanas.

La inmigración hacia el mundo rural ha adquirido creciente relevancia en varios países de América Latina, configurando una dinámica demográfica que complementa, aunque no sustituye, los tradicionales flujos rurales-urbanos (Martínez Villa y Rosá, 2025). Por ejemplo, en Chile, los datos censales de 2017 muestran por primera vez que la inmigración hacia municipios rurales supera a la emigración desde estas zonas, revirtiendo la tendencia observada en la década de 1990.

La migración rural tiene efectos ambivalentes. Para los emigrantes, la movilidad ofrece mejores servicios y oportunidades educativas en municipios urbanos o semiurbanos, aunque con inserciones laborales precarias o informales. Para los territorios de origen, la salida de población joven reduce la densidad, desalienta las inversiones y puede profundizar los procesos de rezago. A la vez, la movilidad temporal sigue siendo una estrategia clave de diversificación de ingresos para muchos hogares rurales.

12 Al clasificar la migración, se suelen distinguir tres categorías según la duración de la estancia: corto plazo (entre tres y doce meses), mediano plazo (de uno a cinco años) y largo plazo (más de cinco años). El reporte se centra en la migración de mediano plazo, principalmente, por ser mensurable a partir de las preguntas realizadas en los censos, los cuales constituyen la principal fuente de información para estudiar el fenómeno. En este marco, se considera migrante a toda persona que, según el censo, no reside en la misma localidad que habitaba cinco años antes. Las localidades de origen y destino se clasifican según el grado de ruralidad del municipio al que pertenecen, utilizando la clasificación DEGURBA. Por otro lado, la migración vinculada al mundo rural puede analizarse desde dos perspectivas: por un lado, los flujos de salida desde localidades rurales hacia otros entornos (emigración rural) y, por otro, los flujos de entrada hacia localidades rurales desde otras áreas (inmigración rural).

Los hogares rurales

La composición de los hogares en ALC ha experimentado cambios profundos en las últimas décadas, reflejando las transformaciones demográficas, en los patrones económicos asociados a la transformación de la estructura productiva y en los patrones culturales, como modificaciones en las normas que rigen los roles de género. Estos cambios han impactado de manera diferencial a los entornos rurales y urbanos, con algunas tendencias convergentes y otras donde persisten diferencias marcadas, como se documenta en el reporte con base en datos de 14 países de la región procesados por CEDLAS (2025).

De forma consistente con la caída de la fecundidad y el aumento de la longevidad, el tamaño promedio de los hogares rurales se redujo en las últimas tres décadas, pasando de un promedio de 4 a 3 miembros. A principios de los años 2000, había niños menores de 14 años en alrededor del 60 % de los hogares; en 2023, esta fracción había disminuido al 43 %, mientras que la presencia de adultos mayores de 65 años en el hogar aumentó del 20 % al 27 % en el mismo período.

Los cambios demográficos han tenido efectos en la vida de las mujeres rurales, su situación en el hogar

y su rol en la economía, aunque de manera mucho menos notoria que en ámbitos urbanos. La jefatura femenina del hogar, muy minoritaria a principios de los años 2000 (3 % de los hogares rurales), pasó a representar el 16 % del total¹³. Esto se ha dado en un contexto en el que los hogares monoparentales, muchos de ellos de jefatura femenina, prácticamente no aumentaron en el ámbito rural, en contraposición con lo que ocurre en ámbitos urbanos.

Otro indicador de la situación de las mujeres en el hogar es el de jefatura económica, medido como el porcentaje de mujeres que son principales proveedoras de ingresos. Según este indicador, su rol no se ha modificado sustancialmente. Aunque se ha registrado un crecimiento con respecto a los niveles prácticamente nulos observados a inicios de la década de 2000, en línea con el aumento en su participación laboral, solo el 6 % de los hogares rurales tienen actualmente a una mujer como principal sostén económico. Esta brecha refleja las dificultades que enfrentan las mujeres en el acceso a empleos de calidad y la persistente distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado, aspectos que continúan limitando su plena autonomía económica.

Condiciones de vida de los hogares rurales

Durante las últimas dos décadas, ALC experimentó un crecimiento sostenido de los ingresos de los hogares, acompañado por una marcada reducción de la pobreza, incluyendo la rural. La proporción de población rural por debajo de la línea internacional de pobreza de USD 6,85 diarios por persona disminuyó del 66 % al 34 % entre 2003 y 2023 (panel A del gráfico 9). En todos los países incluidos en el análisis, la pobreza rural

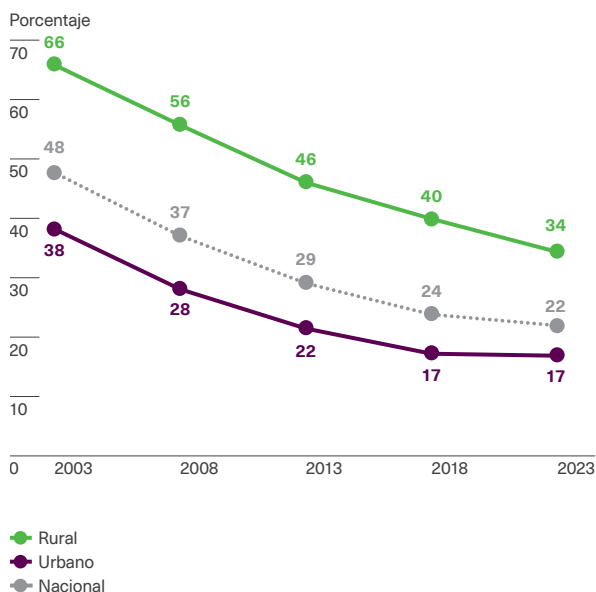
registró en 2023 niveles significativamente menores que veinte años atrás. Persisten, sin embargo, fuertes diferencias entre países: aquellos con menor nivel de PIB per cápita tienden a exhibir las tasas de pobreza rural más elevadas (panel B del gráfico 9).

13 La jefatura del hogar es autorreportada. El aumento de la jefatura femenina puede ser reflejo de diversas situaciones, entre las que se incluyen alteraciones en la composición de los hogares, como el aumento de hogares encabezados por mujeres debido a la ausencia de una pareja o por cambios en el reporte de hogares en los que convive una pareja.

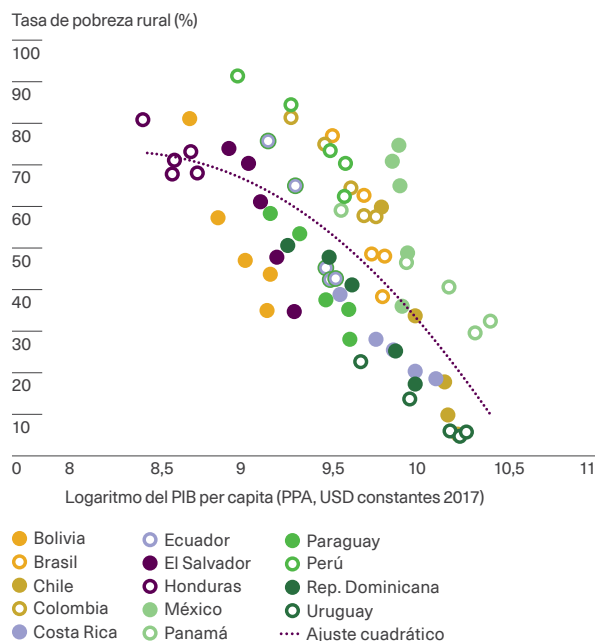
Gráfico 9

Pobreza rural en América Latina y el Caribe, 2003-2023

Panel A.
Pobreza por área, promedio de ALC



Panel B.
Relación entre la proporción de pobreza rural y PIB per cápita



Nota: La pobreza se define como el porcentaje de personas en hogares con ingresos por debajo de un umbral de USD 6,85 a paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona y por día. Cada punto del panel B representa un país y año. Los años considerados son 2003, 2008, 2013, 2018 y 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025) y Banco Mundial (2025b).

Hogares rurales y su vínculo con el sector agropecuario

El proceso de cambio estructural en las economías de ALC ha transformado de manera significativa las estrategias y oportunidades de inserción económica de los hogares rurales. Estos, lejos de responder al estereotipo tradicional del hogar exclusivamente agrícola, presentan hoy una notable diversidad. Si se definen como agrícolas los hogares en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario, se observa que actualmente alrededor del 44 % de los hogares rurales pertenece a esta categoría (figura 1).

Dentro de este grupo, el 69 % corresponde a hogares agrícolas independientes, conformados por aquellos en los que el jefe o cónyuge trabaja por cuenta propia, grupo mayoritario (61 % de los hogares agrícolas), o se desempeña como patrón (8 %). Estos hogares concentran, en buena medida, la pequeña producción agropecuaria que predomina en la región¹⁴.

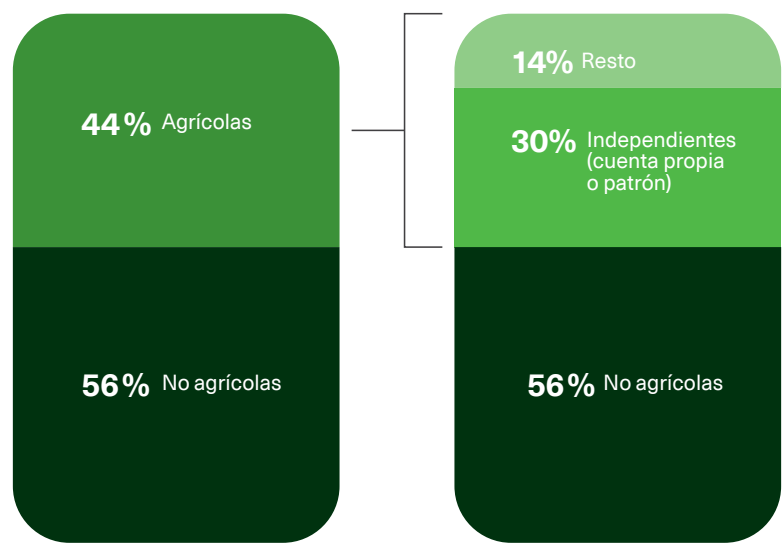
El porcentaje de hogares agrícolas varía de manera significativa entre países. En Perú, por ejemplo, el

¹⁴ En las unidades productivas de pequeña escala que prevalecen en la región coexisten realidades muy distintas: junto a productores de baja productividad y alta vulnerabilidad, se encuentran pequeños productores comerciales e intensivos con niveles de productividad medios o altos.

84 % de los hogares rurales son agrícolas, mientras que en Costa Rica y República Dominicana solo un 22 % se clasifica en esa categoría. Más allá de estas diferencias entre países, se observa una clara

tendencia decreciente en la fracción que representan los hogares agrícolas y agrícolas independientes en casi toda la región.

Figura 1
Clasificación de los hogares rurales según su vínculo laboral con el sector agropecuario.
Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: Los hogares agrícolas se definen como aquellos hogares rurales en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. Dentro de estos, se consideran hogares agrícolas independientes aquellos cuyo jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

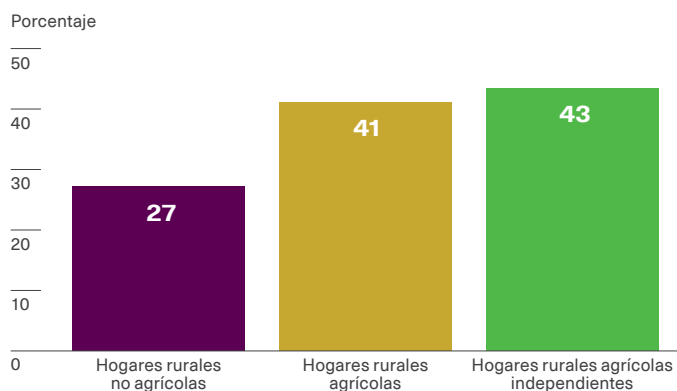
La reducción de la pobreza rural alcanzó a todos los tipos de hogares, aunque persisten fuertes diferencias. En 2023, la incidencia fue del 41 % entre los hogares agrícolas y del 43 % entre los agrícolas independientes, frente al 27 % entre los no agrícolas (gráfico 10). Este patrón, generalizado en la región, muestra que la vinculación con la actividad

agropecuaria, en especial cuando se ejerce por cuenta propia¹⁵, continúa asociada a una mayor vulnerabilidad económica, salvo en países con una agricultura de mayor productividad, como Brasil, Chile y Uruguay.

15 Al analizar por separado los hogares de cuentapropistas y de patrones (los dos grupos que componen el conjunto de hogares agrícolas independientes), se observa que la tasa de pobreza de los primeros es mucho más alta que la de los segundos (45 % frente al 23 %). La tasa de pobreza de los hogares agrícolas independientes del gráfico 10 está dominada por los hogares cuentapropistas, que representan casi el 90 % de los hogares agrícolas independientes.

Gráfico 10

Pobreza rural por tipo de hogar. Promedio de América Latina y el Caribe, 2023



Nota: La pobreza se define como el porcentaje de personas en hogares con ingresos por debajo de un umbral de USD 6,85 a paridad de poder adquisitivo (PPA) por persona y por día. Los hogares agrícolas se definen como aquellos hogares rurales en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario. Dentro de estos, se consideran hogares agrícolas independientes aquellos cuyo jefe o cónyuge es cuentapropista o patrón.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Los ingresos de los hogares rurales

Una parte importante de los rezagos en bienestar y de la vulnerabilidad del mundo rural se explica por la forma en que los hogares generan sus ingresos¹⁶. De acuerdo con datos de encuestas de hogares, la principal fuente son los ingresos laborales monetarios y no monetarios. Estos representan, en promedio, el 78 % del ingreso total de los hogares rurales, una proporción similar a la registrada en los hogares urbanos (80 %).

Las actividades agropecuarias aportan, en promedio, cerca de un tercio del ingreso laboral de los hogares rurales, aunque esta proporción asciende al 77 % entre los agrícolas y al 75 % entre los agrícolas independientes¹⁷. Esta alta especialización incrementa su exposición a los riesgos propios del sector, en particular entre los hogares de menores ingresos, donde las

fluctuaciones en la producción o los precios pueden traducirse en fuertes caídas de bienestar. Los hogares más pobres, además, destinan parte de su trabajo a la producción para autoconsumo. Si bien esto les garantiza una base mínima de sustento, también los hace más dependientes de las condiciones locales y más vulnerables ante eventos adversos, reforzando las brechas de ingresos dentro del mundo rural.

En contraste, los hogares rurales de mayores ingresos presentan una canasta laboral más diversificada. A medida que se asciende en la distribución del ingreso, crece la participación del trabajo asalariado y de las actividades no agropecuarias (panel A del gráfico 11).

16 Los factores que explican las brechas de ingreso entre las áreas rurales y urbanas han sido ampliamente estudiados en la economía del desarrollo, aunque siguen siendo una pregunta abierta. Un elemento central es la brecha de capital humano: una parte sustantiva de esa desventaja se debe a diferencias en las características observables de los trabajadores. No obstante, incluso entre trabajadores con el mismo nivel educativo, la evidencia generada para este reporte muestra que las remuneraciones son más bajas en las zonas rurales. Ello refleja también diferencias del lado de la demanda, asociadas a la mayor presencia de sectores o unidades productivas de baja productividad en los territorios rurales, como se describe en este apartado y en el siguiente. Otros estudios muestran que la brecha está asociada con barreras a la migración, las cuales incluyen fricciones informativas, financieras y de funcionamiento de los mercados de tierras (Lagakos, 2020).

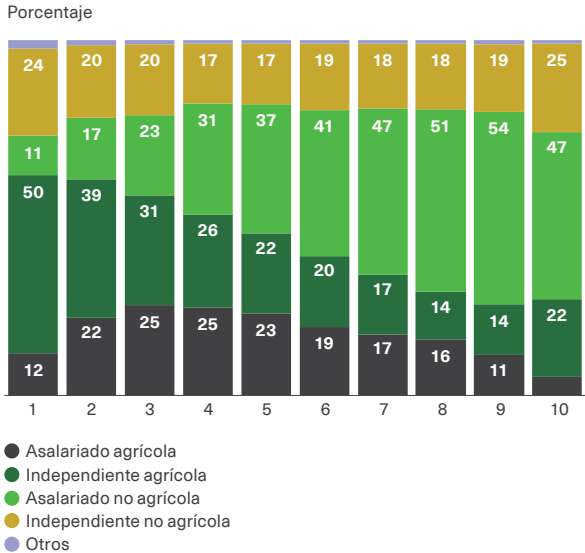
17 Esto contrasta con las áreas urbanas, donde las actividades agropecuarias solo representan el 3 % del ingreso.

Este patrón se observa también dentro del conjunto de hogares agrícolas, aunque de manera menos pronunciada (panel B del gráfico 11). En los deciles más bajos, los ingresos provienen casi exclusivamente del trabajo independiente en el agro; en los segmentos intermedios, aumenta el peso del empleo asalariado dentro del sector, y, en los niveles más altos, predominan las actividades no agropecuarias. Esto evidencia

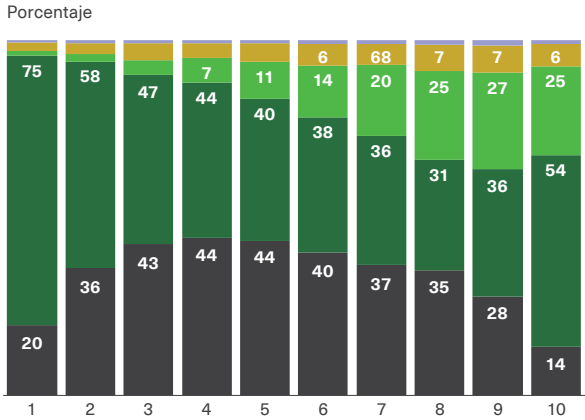
diferencias sistemáticas en la composición del ingreso según el nivel de recursos del hogar, de manera que aquellos con ingresos más elevados combinan en mayor medida fuentes laborales ajenas al agro. No obstante, la diversificación sigue siendo limitada: incluso en el decil más alto, los ingresos vinculados al agro representan alrededor del 68 % del total.

Gráfico 11
Descomposición del ingreso laboral de los hogares por decil de ingreso total. Promedio de América Latina y el Caribe, 2023

Panel A.
Hogares rurales



Panel B.
Hogares rurales agrícolas



Nota: La desagregación corresponde a deciles del ingreso total familiar calculados a nivel nacional. Tomando el promedio de los 14 países, los cuatro primeros deciles incluyen al 53 % de los hogares rurales, mientras que los cuatro últimos deciles, solo al 26 %. El ingreso laboral incluye ingresos monetarios (salarios o ganancias del trabajo por cuenta propia) y no monetarios (autoconsumo y remuneraciones en especie). Los ingresos agrícolas del hogar se estiman como la suma de todos los ingresos laborales (tanto de la ocupación principal como de las secundarias) de los miembros que declaran tener como ocupación principal una actividad en el sector agropecuario. Los hogares agrícolas son aquellos en los que el jefe o su cónyuge tienen su ocupación principal en el sector agropecuario.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

La baja productividad del trabajo por cuenta propia, que tiene un peso significativo en los ingresos laborales de los hogares ubicados en los deciles más bajos de la distribución, limita el aporte relativo del trabajo

al ingreso total del hogar. En estos segmentos, las transferencias estatales, las jubilaciones y las transferencias privadas, como las remesas, el apoyo de familiares o redes comunitarias, constituyen fuentes

esenciales de sustento. En promedio, las transferencias estatales¹⁸ y las jubilaciones representaban en 2023 el 33 % y el 38 % del ingreso total de los hogares rurales en los deciles 1 y 2, respectivamente (es decir,

el 20 % más pobre de la población rural). Las transferencias privadas, por su parte, aportaban un 16 % y un 20 % en esos mismos grupos.

Estructura sectorial del empleo rural, informalidad laboral y brecha salarial

En las últimas décadas se han observado transformaciones profundas en la estructura productiva y las formas de inserción laboral en el mundo rural de ALC. No obstante, la elevada informalidad sigue siendo uno de los principales rasgos de la vulnerabilidad en esos entornos.

La proporción de trabajadores rurales ocupados en el sector agropecuario se redujo de manera sostenida en las últimas dos décadas, mientras que el empleo en servicios absorbió una parte creciente de la fuerza laboral (panel A del gráfico 12). Por primera vez en la región, menos de la mitad de los trabajadores rurales se desempeñan en actividades agropecuarias, lo que representa una caída de 10 puntos porcentuales desde 2003. Este cambio ha modificado de forma estructural el perfil del empleo rural, históricamente dominado por el trabajo agrícola.

En paralelo, la organización del trabajo también cambió (panel B del gráfico 12). Entre 2003 y 2023, la proporción de asalariados rurales aumentó del 32 % al 47 %, impulsada sobre todo por el aumento del empleo asalariado registrado o formal. En contrapartida, se redujo la participación del trabajo cuentapropista de baja calificación de un 50 % a un 38 % y del empleo no remunerado de un 11 % a un 8 %, principalmente familiar y femenino. En conjunto, estos cambios se tradujeron en una disminución de la informalidad laboral rural de 11 puntos porcentuales, pasando del 78 % en 2003 al 67 % en 2023.

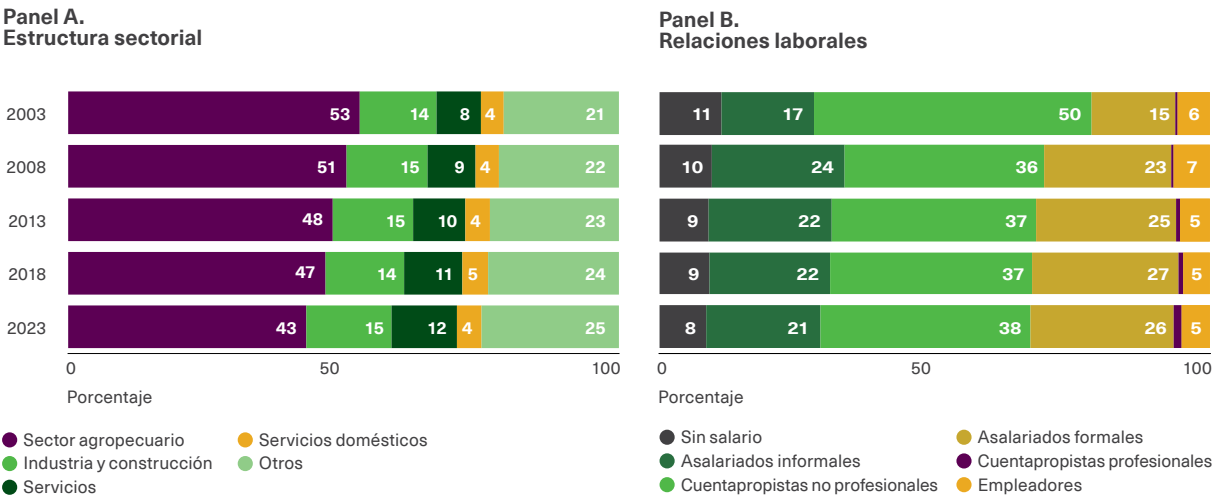
A pesar de estos avances, la informalidad sigue siendo una característica estructural del empleo rural: afecta a casi siete de cada diez trabajadores, frente a menos de la mitad en las zonas urbanas (47 %). La informalidad implica menores ingresos, ausencia de protección social y falta de estabilidad laboral, perpetuando la vulnerabilidad de amplios segmentos de la población rural. Aunque es más elevada en el sector agropecuario, donde supera en 18 puntos porcentuales a la observada en el resto de los sectores, se extiende a todos los ámbitos del trabajo rural. En línea con esa mayor informalidad, pero también por otros factores, los puestos en el agro son peor remunerados: en promedio, los ingresos son un 25 % inferiores a los del empleo rural no agropecuario.

En lo que respecta a los salarios rurales, estos han crecido en las últimas décadas, aunque siguen siendo en promedio un 34 % inferiores a los urbanos. Esta brecha responde tanto a factores de la oferta laboral, por ejemplo, menores niveles de capital humano, como a factores de la demanda, entre ellos la concentración de actividades de baja productividad en los territorios rurales. La evidencia muestra que, aun entre trabajadores con niveles educativos similares, persiste una doble penalidad salarial por trabajar en el agro y residir en zonas rurales: los salarios de quienes se encuentran en esa situación son un 26 % más bajos, en promedio, que los de trabajadores urbanos no agropecuarios¹⁹.

18 Las transferencias estatales en la base de CEDLAS (2025) de donde surgen estos datos incluyen las transferencias monetarias de programas antipobreza, en especie y otras transferencias sociales corrientes no contributivas (como asignaciones familiares y subsidios de desempleo no contributivos) y excluyen las pensiones. Una de las principales herramientas de sostenimiento de ingresos en la actualidad para los grupos más vulnerables son los programas de transferencias condicionadas, vigentes en 19 países de la región (CEPAL, 2025).

19 Estas estimaciones se obtienen de ecuaciones de Mincer que controlan por educación, edad y género, utilizando encuestas de hogares de 14 países.

Gráfico 12
Evolución del empleo rural: sectores y relaciones laborales. Promedio de América Latina y el Caribe, 2003-2023



Nota: Los indicadores se computan para la población de entre 25 y 54 años. En el panel A, la categoría “sector agropecuario” comprende agricultura, ganadería, caza y silvicultura; “servicios” incluye servicios profesionales, salud y educación; “otros” engloba pesca, explotación de minas y canteras, comercio, transporte y administración. Los sectores primarios pesca y explotación de minas y canteras representan una fracción muy baja del empleo rural (1,6 %) y por ello se incluyen dentro de la categoría “otros”. Los totales pueden diferir levemente de 100 % por redondeo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

Dentro del empleo rural, ciertos grupos enfrentan desventajas adicionales. Las mujeres, con menos presencia en el agro, se concentran en ocupaciones más informales y peor pagadas; una de cada cinco trabaja sin salario y sus ingresos son, en promedio, un 8 % más bajos que los de los hombres en el agro y un 30 % inferiores en el resto de los sectores. La maternidad profundiza de manera muy marcada estas brechas (Marchionni et al., 2025). La población indígena, por su parte, presenta mayores niveles de participación laboral. Este grupo está sobrerrepresentado en actividades agropecuarias por cuenta propia, caracterizadas por una elevada informalidad y bajos ingresos.

Servicios e infraestructura rural

Los servicios básicos y la infraestructura son la capa habilitante del desarrollo rural: mejoran la salud y el bienestar, elevan la productividad de los hogares y unidades económicas y conectan a las comunidades con mercados, empleos y servicios que no pueden proveerse localmente. En ALC, el acceso a agua, saneamiento, electricidad, conectividad física y digital, educación, salud y servicios financieros ha avanzado, pero persisten brechas territoriales. El problema central ya no es solo llegar, sino cómo se presta el servicio: los desafíos de calidad, continuidad y asequibilidad limitan en muchos casos su aporte al bienestar y a la inclusión productiva.

Es importante destacar que la falta de acceso a ciertos servicios puede originarse tanto en restricciones

de la oferta, resultado muchas veces de los altos costos de extender y operar redes en territorios dispersos, como en barreras de la demanda, vinculadas a los precios, la capacidad de pago de los hogares, la información o las habilidades de uso, entre otras. Estas consideraciones son comunes a todos los servicios analizados y clave para traducir los diagnósticos a políticas efectivas, ya que cada tipo de limitación requiere instrumentos distintos.

Medir con precisión estas brechas exige cierta cautela. Muchas estadísticas no distinguen suficientemente lo rural y, cuando las localidades mejoran y amplían su cobertura, suelen reclasificarse como urbanas, lo que en conjunto podría llevar a subestimar los progresos reales.

Agua, saneamiento y electricidad: avances en cobertura, rezagos en calidad

El acceso al agua potable en áreas rurales aumentó de manera constante en las últimas dos décadas. Entre 2003 y 2023, la cobertura promedio pasó del 51 % al 71 % de los hogares y la brecha urbano-rural se redujo (gráfico 13). Sin embargo, solo el 55 % de la población rural accede a agua gestionada de forma segura, esto es, agua que proviene de una fuente mejorada, se encuentra disponible en el hogar, está libre de contaminación prioritaria y puede obtenerse cuando se necesita, indicador que corresponde a la meta 6.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 39 % de los hogares rurales tiene acceso básico y un 6 % continúa dependiendo de fuentes precarias, de acuerdo con datos del Programa Conjunto OMS/

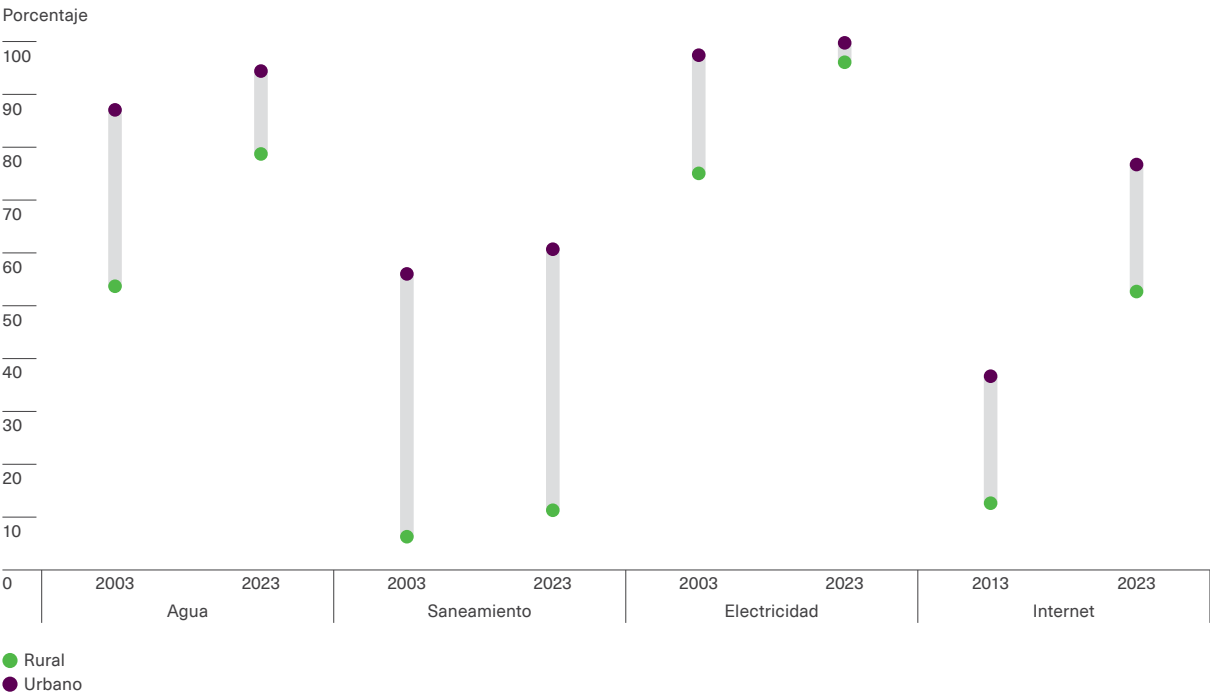
Unicef de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene (JMP, 2025).

El acceso a fuentes de agua precarias e incluso el acceso básico, aunque en menor medida, siguen implicando riesgos sanitarios y profundizando desigualdades, especialmente en el uso del tiempo de las personas responsables de acarrear el agua. Mujeres y niñas suelen asumir esta tarea, lo que repercute negativamente en su desempeño laboral y autonomía económica, en su bienestar y su escolarización.

El saneamiento presenta rezagos más marcados: solo el 11 % de los hogares rurales cuenta con instalaciones adecuadas conectadas a la red, frente al 65 % en áreas urbanas. Las brechas se han mantenido casi constantes en dos décadas. Parte de estos valores bajos también responde al umbral de clasificación: en las encuestas de hogares, la categoría de “saneamiento adecuado” suele requerir conexión al alcantarillado, condición menos viable en localidades rurales, y, por ende, no refleja adecuadamente soluciones locales *in situ* que pueden ser igualmente seguras.

No obstante, considerando el indicador de la meta 6.2 de los ODS, que contempla el acceso a saneamiento seguro (instalación mejorada no compartida, con excretas contenidas y vaciadas o transportadas y tratadas de manera segura o tratadas *in situ*), los rezagos son igualmente notorios. Aunque no hay datos de saneamiento seguro para todos los países, en siete de ALC (Cuba, Ecuador, Guyana, Jamaica, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago), el promedio ronda el 50 %, lo que evidencia la distancia pendiente para universalizar este estándar (JMP, 2025).

Gráfico 13
Proporción de hogares con acceso a servicios por año y área de residencia. Promedio en América Latina y el Caribe



Notas: Las cifras corresponden al porcentaje de hogares con acceso a servicios por área, en promedio simple. En algunos países no se contaba con información para los años seleccionados, por lo cual se asignó el más cercano.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CEDLAS (2025).

El acceso a la electricidad en el mundo rural de ALC es hoy casi universal: la mayoría de los países supera el 90 % de cobertura. La brecha urbano-rural se redujo drásticamente entre 2003 y 2023 (gráfico 12) gracias a programas nacionales y a la incorporación de soluciones descentralizadas con energías renovables.

La principal brecha en la provisión del servicio eléctrico entre localidades urbanas y rurales en ALC se manifiesta en su calidad más que en el acceso. Dos casos ejemplifican los problemas. En Panamá y Uruguay los cortes en la provisión del servicio en zonas rurales duran entre dos y cuatro veces más que en las urbanas, respectivamente, y los estándares regulatorios suelen ser menos exigentes para localidades rurales (ASEP, 2024; URSEA, 2025).

Conectividad física: la accesibilidad como barrera territorial

El transporte rural es un determinante transversal de la productividad y el bienestar. Uno de los primeros indicadores para medir la disponibilidad de infraestructura de transporte es la longitud de las carreteras con respecto a la superficie del territorio. ALC tiene una baja densidad vial a nivel nacional (17 km de ruta por cada 100 km² de superficie), con solo el 22 % pavimentado, frente al 82 % en Europa. Esto se traduce en mayores costos logísticos y aislamiento.

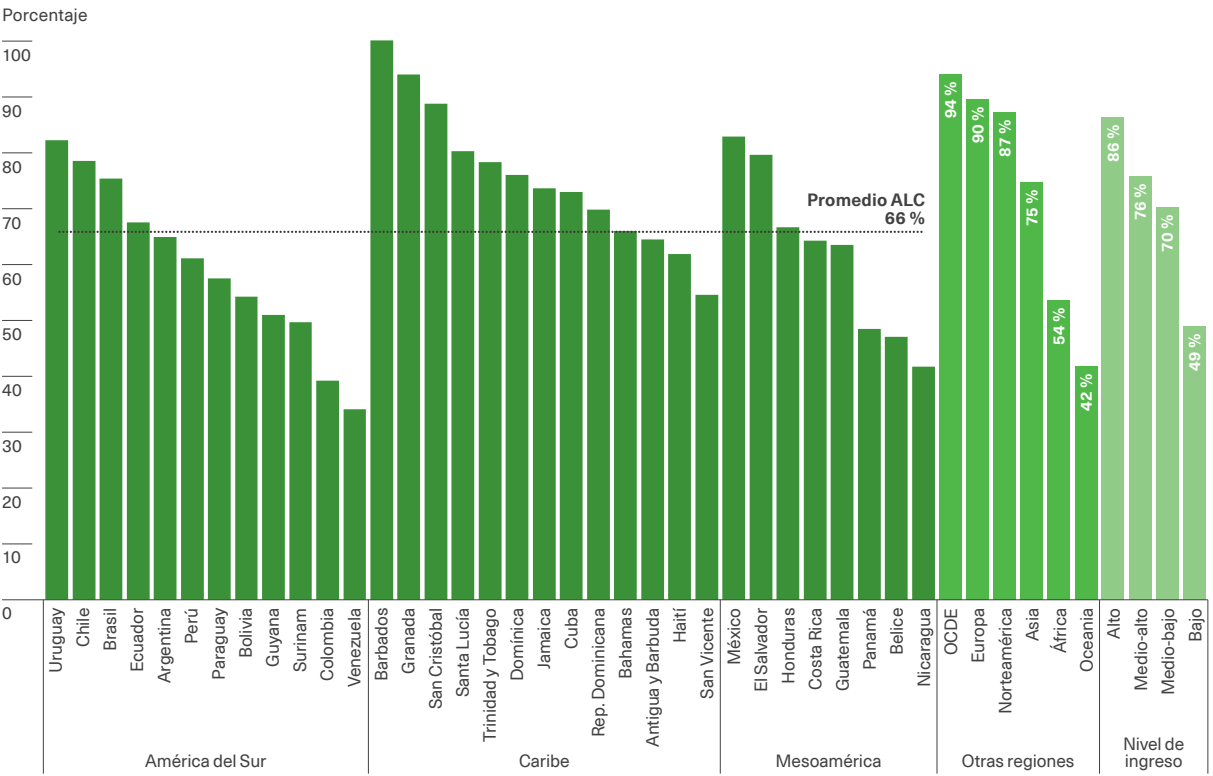
Por otro lado, la población rural de ALC se caracteriza por una alta dispersión espacial y, en promedio, mayor aislamiento que en los países desarrollados. Por ello, es importante considerar la distribución en el territorio en relación con la cercanía a los habitantes para aproximar en qué medida la infraestructura de transporte brinda accesibilidad.

Según estimaciones realizadas para este RED, el 66 % de la población rural vive a menos de 2 km de una ruta transitable todo el año (gráfico 14), pero esta cifra desciende al 40 % cuando se consideran rutas pavimentadas (Buccari et al., 2025). Al interior de los países, también se observan heterogeneidades entre municipios con distintas características. Cuanto mayor es la superficie territorial del municipio y la variación de altitud, menor es, en promedio, la proporción de población rural con acceso a una ruta a menos de 2 km.

En contraste, se encuentra una relación positiva con la proporción de población rural (respecto de la población total del municipio), lo que podría reflejar una priorización de la construcción de rutas en entidades locales con mayor participación de la población rural.

El indicador de acceso vial guarda una relación positiva, además, con los ingresos tributarios per cápita de los municipios. Esta asociación se vuelve aún más pronunciada cuando se considera exclusivamente la accesibilidad a rutas pavimentadas. Esa relación podría reflejar una causalidad bidireccional: por un lado, los gobiernos locales con mayores recursos fiscales estarían en mejores condiciones de invertir en infraestructura vial secundaria o terciaria; por otro, una mayor accesibilidad podría dinamizar la economía local y, con ello, aumentar la recaudación tributaria.

Gráfico 14
 Porcentaje de población rural que vive a menos de 2 km de una ruta en países de América Latina y el Caribe y otras regiones



Nota: Los porcentajes mostrados en el gráfico incluyen tanto rutas pavimentadas como no pavimentadas. La metodología utilizada para los países de ALC se puede consultar en el recuadro 8.2 del informe completo. Los datos para el resto de los países se obtuvieron de Azavea et al. (2019) y se agregaron de acuerdo a la clasificación por nivel de ingreso del Banco Mundial (2025a). El promedio de OCDE no considera países de ALC.

Fuente: Buccari et al. (2025).

Conectividad digital: la nueva frontera del acceso rural

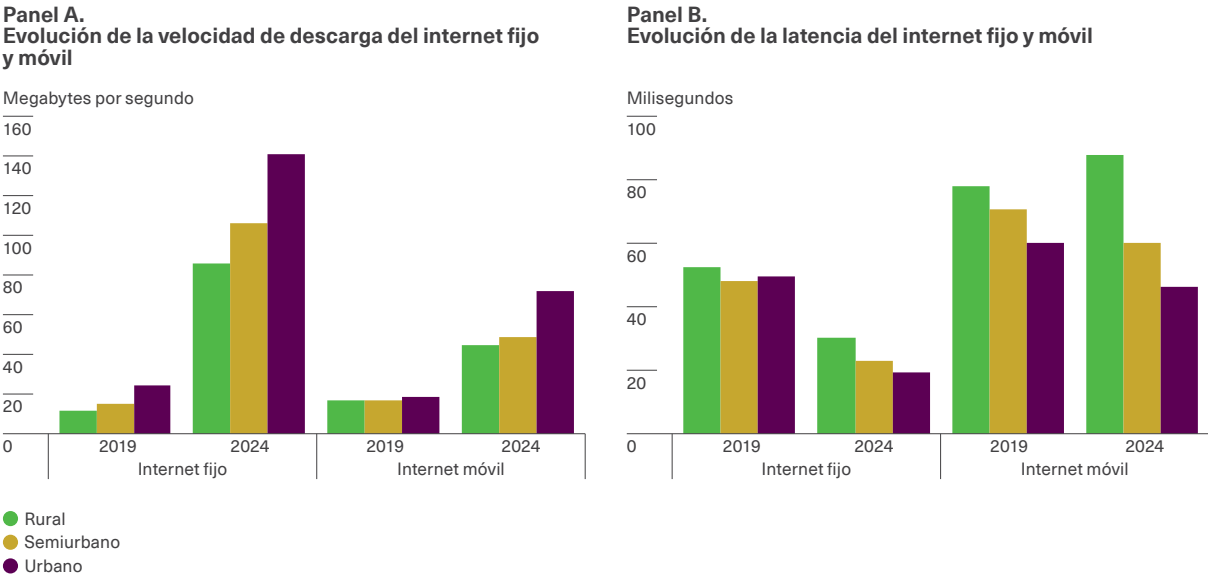
La conectividad digital es hoy una condición para la inclusión educativa, de salud, laboral y productiva. Sin embargo, apenas la mitad de los hogares rurales accede a internet, frente al 86 % en las áreas urbanas (gráfico 13). La brecha en velocidad de conexión es aún mayor: en promedio la velocidad en localidades urbanas es un 64 % superior a las rurales (panel A del gráfico 15). El tiempo de respuesta de la red (latencia) también es un indicador de calidad relevante,

sobre todo para la utilización de servicios como los de salud o educación virtual. Se observa que, en general, los tiempos de espera de los usuarios disminuyeron entre 2019 y 2024 (panel B del gráfico 15). Sin embargo, el avance fue más marcado en las áreas urbanas que en las rurales.

Las restricciones de infraestructura se suman a las barreras de la demanda: el precio del servicio y de los equipos sigue siendo la limitación más mencionada, especialmente en hogares de bajos ingresos. También inciden el nivel educativo, la edad del jefe o jefa de hogar y la falta de habilidades digitales. La expansión de redes móviles y satelitales ha mejorado la

cobertura, pero el reto es lograr un uso efectivo para acceder a bienes y servicios clave para la inclusión social y productiva. Un gran espacio de oportunidad para las zonas rurales es que la conectividad sirva para acceder a servicios públicos, de educación, telemedicina y comercio electrónico, entre otros.

Gráfico 15
Indicadores de calidad del internet fijo y móvil en América Latina y el Caribe por grado de urbanización, 2019 y 2024



Nota: La velocidad y latencia reflejadas en los paneles A y B son el promedio de los municipios en función de su clasificación por el grado de urbanización (DEGURBA).
Fuente: Elaboración propia con base en datos de OOKLA (s. f.), CAF (2025) y Schiavina et al. (2023).

Educación: cobertura ampliada, limitaciones en recursos e infraestructura escolar

En casi todos los países de la región, la matrícula en educación primaria rural se ha universalizado, pero persisten amplias brechas de calidad. Las escuelas rurales suelen ser más pequeñas, multigrado y con menos recursos, lo que limita las oportunidades

de aprendizaje. En el nivel secundario y terciario, el acceso continúa siendo más acotado y las brechas de calidad se amplifican. La distancia a los centros educativos y el costo del transporte son los principales obstáculos para la asistencia y la permanencia escolar.

Las diferencias de calidad están estrechamente vinculadas a las condiciones de la infraestructura y la disponibilidad de docentes, factores que continúan siendo menos favorables en las zonas rurales. En muchos países, una proporción baja de alumnos rurales asiste a escuelas con servicios básicos adecuados, como agua potable, espacios de aprendizaje (bibliotecas o laboratorios) y con conectividad digital suficiente. Según Allub et al. (2025), el número de alumnos por computadora no difiere sustancialmente entre escuelas rurales y urbanas, pero sí el porcentaje de

equipos conectados a internet, reflejando desigualdades en los recursos tecnológicos disponibles.

Las dificultades para atraer y retener docentes calificados, junto con la prevalencia de la educación multigrado, constituyen otros rasgos persistentes del sistema educativo rural. Estas condiciones, combinadas, contribuyen a explicar las diferencias observadas en los resultados de aprendizaje y en las trayectorias educativas entre estudiantes rurales y urbanos.

Salud: dispersión, escasez de personal y baja capacidad resolutive

La cobertura de servicios de salud en áreas rurales se ha ampliado con la red de atención primaria, pero la capacidad resolutive es muy desigual. En términos de la oferta de servicios, al igual que en el caso educativo, la falta de economías de escala y la dispersión de la población rural pueden influir en la disponibilidad de centros de salud y limitar el acceso a establecimientos de mayor complejidad.

Los centros rurales suelen tener menos personal y equipamiento. Aunque la evidencia comparativa para la región es limitada, el caso de Chile ilustra bien las diferencias. Según datos del Ministerio de Salud de Chile (DEIS, 2025), todas las comunas rurales tienen al menos un establecimiento de salud de baja complejidad, aunque solo el 8 % tiene uno de complejidad media (mientras que en las comunas urbanas la cifra correspondiente es del 95 %) y menos del 1 % posee uno de complejidad alta (65 % en el caso de

las comunas urbanas). Como resultado de ello, la población debe desplazarse para acceder a estos servicios y las distancias pueden ser considerables. Por su parte, datos de Brasil muestran que la cantidad de profesionales de la salud por habitante, particularmente médicos, es mayor en promedio en municipios con mayor grado de urbanización.

Esta realidad pone de manifiesto que, ante demandas de mayor complejidad, el sistema de salud en el ámbito rural tiene, por el momento, menor capacidad resolutive y depende del desplazamiento físico de las personas. Allí las barreras de la demanda, como el poder adquisitivo y los tiempos de traslado, cobran especial relevancia. Los déficits en salud se agravan en comunidades indígenas y dispersas, donde la atención no siempre se adapta a contextos culturales y lingüísticos.

Acceso y barreras a la inclusión financiera

La expansión de la inclusión financiera es crucial no solo para facilitar las transacciones y el ahorro, sino también para manejar los riesgos, financiar pequeñas inversiones y promover el empoderamiento

económico, especialmente de las mujeres rurales. Pese a ello, el 33 % de la población rural de ALC no tiene cuenta en una institución financiera ni utiliza dinero móvil. El uso de servicios semiformales,

como las asociaciones rotativas de ahorro y crédito (ROSCA, por sus siglas en inglés) o las asociaciones comunitarias de ahorro y préstamo (VSLA, por sus siglas en inglés), suele ser más extendido en el medio rural y tiene alta participación femenina, como el caso de experiencias en Perú (Frisancho y Valdivia, 2024).

Las barreras principales de acceso a una cuenta bancaria son la distancia física a los puntos de atención y los costos de la bancarización. También cabe destacar que la desconfianza en el sistema financiero es mayor entre los adultos del mundo rural que los del entorno urbano. A esto se suman las brechas significativas entre población urbana y rural respecto a indicadores de conocimiento financiero. Sin embargo, la actitud frente a la tecnología financiera (digital) es similar en las zonas urbanas y rurales, lo que sugiere que existe predisposición en el mundo rural para adoptar productos digitales.

El uso de dinero móvil, de hecho, ha aumentado rápidamente en los últimos años. En 2021, un 25 % de la población adulta rural tenía una cuenta y en 2025 este indicador aumentó al 33 %. Si bien el dinero móvil puede ser clave para ampliar la inclusión en áreas rurales, por el momento su papel parece más complementario que sustitutivo de otro tipo de instrumentos financieros.

Hoja de ruta para una prosperidad rural inclusiva

El desarrollo del mundo rural en ALC requiere un conjunto articulado de políticas que combinen productividad, sostenibilidad e inclusión social. Los avances recientes en la región han sido significativos, pero todavía insuficientes para garantizar una convergencia sostenida entre las áreas rurales y urbanas. Las políticas que se presentan en el reporte constituyen

un menú de alternativas que los países de la región pueden adaptar según su estructura productiva, nivel de desarrollo y capacidades institucionales. Todas comparten un mismo objetivo: transformar la ruralidad en un espacio de oportunidades económicas y bienestar social, capaz de contribuir al desarrollo sostenible de la región.

Sector agropecuario

La modernización del sector agropecuario en ALC requiere un conjunto de condiciones habilitantes. Entre ellas, el acceso al financiamiento ocupa un lugar central dado que condiciona la capacidad de los productores para incorporar capital, insumos intermedios y nuevas tecnologías. La heterogeneidad de las unidades productivas de la región requiere diseñar líneas y productos financieros diferenciados. Se precisa innovación en los mercados de microcréditos, como períodos de gracia relacionados con la cosecha, colaterales alternativos y herramientas tecnológicas para mejorar la evaluación crediticia. El gobierno también puede contribuir mediante líneas de créditos especiales para pequeños productores, fondos de garantía, subsidios a tasas de interés y cofinanciamiento de inversiones tecnológicas. La digitalización también ofrece un canal prometedor para ampliar el acceso y optar a créditos con base en los rendimientos de los cultivos, las ventas y los comportamientos de pago (Klinger et al., 2013; Mengede, 2025).

La gestión del riesgo productivo es otro componente clave para sostener la inversión y proteger los ingresos rurales. El aseguramiento agropecuario, ya

sea a través de seguros multirriesgo, de ingresos o paramétricos, contribuye a mitigar pérdidas asociadas a choques climáticos y de mercado, al tiempo que mejora las condiciones de acceso al crédito. Sin embargo, la cobertura de estos instrumentos sigue siendo limitada, lo que justifica un rol activo del Estado en su expansión.

La inversión en infraestructura rural constituye un tercer pilar para la modernización del sector. La mejora de los caminos rurales, el acceso a la electricidad, la expansión de los centros de acopio y refrigeración, la incorporación del riego tecnificado y el fortalecimiento de la conectividad digital reducen los costos, disminuyen las pérdidas postcosecha durante el almacenamiento y traslado de la producción a otras áreas y facilitan la inserción en mercados más dinámicos.

La seguridad jurídica sobre la tierra y la calidad de los sistemas catastrales también influyen de manera decisiva en las decisiones de inversión de largo plazo. La ausencia de esta institucionalidad limita el acceso al crédito y desalienta la adopción de tecnologías de

mayor productividad. En este sentido, el desarrollo de catastros modernos, digitales y multipropósito, que integren información fiscal, jurídica y de planificación territorial, con procesos participativos y focalizados en zonas rezagadas y ecosistemas estratégicos, puede fortalecer la seguridad jurídica y facilitar políticas de financiamiento e inversión más inclusivas. La evidencia disponible sugiere que los procesos de formalización de la propiedad de la tierra bien diseñados pueden contribuir a una asignación más eficiente de los factores productivos (De Janvry et al., 2015).

El crecimiento sostenido de la productividad agropecuaria requiere, además, avanzar de manera conjunta en la modernización del capital físico y en el fortalecimiento de los recursos humanos. La promoción de modelos de provisión de servicios productivos —como el arrendamiento de maquinaria o la prestación compartida de servicios de mecanización— puede ampliar el acceso a tecnologías clave sin requerir grandes inversiones individuales en activos. Las políticas orientadas a la innovación y la adopción tecnológica deben articular inversiones en investigación aplicada con foco en las condiciones locales, financiamiento específico para la incorporación de nuevas tecnologías, mejoras en la conectividad rural y estrategias de desarrollo de las capacidades, incluyendo la alfabetización digital. En este marco, los ecosistemas de agrotecnología, las alianzas público-privadas, las incubadoras de innovación y la vinculación con universidades pueden acelerar la difusión de soluciones tecnológicas adaptadas a los distintos contextos productivos.

De forma complementaria, resulta fundamental integrar la educación formal, incluida la educación técnica y postsecundaria, y la formación continua con

las políticas productivas del sector. La modernización de los sistemas de extensión rural, el fortalecimiento de la formación técnica alineada con las cadenas de valor y la mejora en el acceso territorial a centros educativos son elementos clave para potenciar el impacto de las inversiones productivas. En algunos contextos, estas acciones pueden reforzarse mediante programas de empleo local que faciliten la transición entre la formación y oportunidades productivas concretas.

Otro conjunto de políticas se orienta a la diferenciación de productos mediante la adopción de estándares de calidad, trazabilidad y certificación, claves para mejorar la inserción internacional y reducir la exposición estructural de la región a la volatilidad de los precios de los bienes primarios (Ocampo, 2017). Experiencias como el café de Colombia o la carne de Uruguay muestran que estos instrumentos pueden estabilizar ingresos y facilitar el acceso a mercados de mayor valor, al tiempo que las estrategias de diversificación abren también oportunidades para alimentos autóctonos. En este marco, el fortalecimiento de las políticas de control de riesgos fitosanitarios resulta esencial, tanto por sus efectos sobre la productividad local y la salud como por su rol habilitante para el cumplimiento de estándares y certificaciones.

Finalmente, estas líneas de acción no excluyen la necesidad de políticas específicas orientadas a mejorar la productividad de los pequeños productores, las cuales son fundamentales para elevar los ingresos rurales, reducir las brechas y fortalecer la inclusión económica. En este sentido, potenciar su inserción en cadenas de valor agroalimentarias resulta clave para ampliar sus oportunidades económicas y asegurar la captura de mayor valor agregado.

Sectores clave para la transición energética

La transición energética global ofrece a ALC una oportunidad estratégica para reconfigurar sus estructuras productivas y promover un desarrollo rural más sostenible, diversificado e inclusivo. Existe un conjunto de políticas sectoriales específicas que pueden acelerar la transición energética y maximizar sus beneficios en los territorios rurales.

Un primer eje es fortalecer la gobernanza de los recursos naturales. Marcos legales sólidos, transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para atraer inversión y asegurar la aceptación social. Estándares de transparencia y ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) resultan cada vez más importantes para acceder a los mercados internacionales y

legitimar proyectos a nivel local. Este enfoque puede mitigar las tensiones que históricamente han surgido por el daño ambiental; al mismo tiempo, permite evidenciar y legitimar los potenciales beneficios que ofrece la explotación responsable de los minerales críticos para la transición energética global. Chile destaca con su Estrategia Nacional de Minería, que fija metas de carbononeutralidad para 2040 y la eliminación de desechos mineros para 2050. Estos marcos normativos, junto con un monitoreo ambiental riguroso, son esenciales para prevenir desastres y asegurar la sostenibilidad de largo plazo.

Un segundo componente clave de la gobernanza de los recursos naturales es la gestión de las tensiones por el uso del territorio y del agua, especialmente entre minería, agricultura y consumo humano. En este ámbito, los instrumentos de participación y diálogo resultan esenciales para reducir conflictos y fortalecer la legitimidad social de los proyectos. La consulta previa e informada, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y los comités de monitoreo ambiental participativo, que reúnen a comunidades, empresas y gobiernos, son ejemplos de mecanismos que contribuyen a la prevención, detección y mitigación de impactos ambientales.

La gestión prudente de los ingresos derivados de las industrias extractivas es otro desafío crucial. Los fondos de estabilización o soberanos, como el Fondo de Estabilización Fiscal de Perú, permiten manejar la volatilidad de los precios y asegurar la sostenibilidad fiscal. Los mecanismos de distribución de rentas extractivas son herramientas que buscan generar impactos positivos en el bienestar de las comunidades

locales. Adicionalmente, las políticas de contenido local, como las cuotas de empleo y la contratación de proveedores del lugar donde se desarrolla actividad, promueven encadenamientos locales y pueden tener impactos positivos en la generación de ingresos para los pobladores rurales.

La transformación tecnológica del sector extractivo ofrece oportunidades para aumentar la eficiencia y reducir los impactos ambientales. La adopción de herramientas digitales, como los sensores, la inteligencia artificial, los drones y el monitoreo satelital, puede mejorar la seguridad de los trabajadores, optimizar el uso de los recursos y disminuir las emisiones. Además, la electrificación de maquinaria y la autogeneración renovable ya están expandiéndose rápidamente en minas y empresas de la región. Para acelerar esta transición, los gobiernos pueden promover incentivos financieros, como créditos blandos, subsidios o esquemas de cofinanciamiento, orientados a la adopción tecnológica y a la formación de capacidades locales en gestión ambiental, digitalización y mantenimiento industrial.

Finalmente, un requerimiento transversal para el correcto aprovechamiento de las oportunidades son las políticas de incentivo a la inversión privada, como los incentivos fiscales o mecanismos de ventanillas únicas. Debido a que estos proyectos requieren grandes inversiones de capital iniciales y planes de largo plazo, estas políticas deben ir acompañadas de estabilidad política y macroeconómica, así como de políticas de seguridad nacional que prevengan la incidencia de las actividades ilícitas relacionadas con los recursos naturales.

Sectores con potencial para la diversificación productiva del mundo rural

La diversificación productiva es clave para impulsar el desarrollo rural y reducir la vulnerabilidad frente a choques exógenos. Para materializarla, se requieren políticas sectoriales consistentes, financiamiento adecuado y capacidades institucionales

que permitan desarrollar ventajas comparativas de largo plazo.

Sector forestal

El negocio forestal es inherentemente de largo plazo y, por lo tanto, depende de políticas estables y seguridad jurídica. Las experiencias exitosas de Brasil y Uruguay muestran la importancia de instituciones específicas para el sector, marcos regulatorios claros, agilidad administrativa y políticas nacionales de fomento del sector. También se requiere apoyo financiero a largo plazo, con préstamos que posterguen pagos parciales de capital o intereses hasta el final de la operación, dado que los retornos no se materializan hasta mucho después (entre 8 y 15 años). La banca privada no siempre ofrece este tipo de financiamiento, por lo que el sector público puede cumplir un rol relevante. No obstante, estos estímulos deben diseñarse con cautela, pues el sector tiende a mostrar una alta concentración en grandes unidades productivas y los subsidios podrían llevar a una concentración de los fondos públicos en pocas manos.

Las certificaciones son otro instrumento para agregar valor a la producción y acceder a mercados internacionales. Estas certificaciones también promueven condiciones laborales más equitativas y el reconocimiento de derechos indígenas y comunitarios. Los gobiernos pueden facilitar el apoyo y acceso a las certificaciones, especialmente para pequeños productores. Este apoyo además fortalece la capacidad del sector de acceder a mercados de créditos de carbono, que requieren certificaciones para demostrar el aporte a la captura de emisiones. Estos mercados permiten obtener recursos para la conservación, forestación y reforestación y pueden ayudar a financiar proyectos forestales y generar empleo en áreas de conservación.

Pesca y acuicultura

El desarrollo del sector pesquero y acuícola en ALC requiere promover una acuicultura sostenible y tecnológicamente avanzada. También necesita mejorar las condiciones laborales y de formalización en toda la cadena de valor, aprovechar el contenido nutricional de sus productos para fomentar mejoras en la seguridad alimentaria regional y aportar al turismo a través de la gastronomía.

Para avanzar hacia la sostenibilidad del sector, es prioritario fortalecer las capacidades de control y gestión pesquera. Las políticas recomendadas incluyen invertir en infraestructura física para el monitoreo de la pesca INDNR y capacitar al personal responsable de la vigilancia. Entre las políticas de adaptación climática se incluyen los sistemas de alerta temprana y la capacitación e integración de los pescadores en los planes de manejo costero resiliente.

Aun siendo la segunda región acuícola del mundo, ALC concentra su producción en pocos países, por lo que existe amplio margen para expandir cultivos de peces, moluscos, crustáceos y algas en más territorios rurales. Las políticas recomendadas incluyen transferencias de tecnología, financiamiento y capacitación para pequeños y medianos acuicultores.

A pesar de ser una región exportadora neta de productos del mar, ALC registra un bajo consumo interno de pescado, salvo algunas excepciones. Esto ofrece importantes oportunidades de expansión de la demanda para el sector, con políticas como campañas de educación nutricional y programas de alimentación escolar con productos locales. A su vez, el desarrollo de la gastronomía promueve también el turismo en zonas costeras, permitiendo una mayor diversificación de los ingresos rurales.

Turismo

El turismo rural enfrenta limitaciones estructurales: infraestructura deficiente, conectividad limitada y carencias en la provisión o calidad de los servicios básicos. Por ello, se recomienda integrar los beneficios del turismo en la planificación territorial, de modo que las inversiones públicas en caminos, saneamiento o energía también potencien la actividad turística. Asimismo, es crucial garantizar estándares ambientales y sociales para evitar impactos negativos sobre los ecosistemas y las comunidades.

En el turismo rural y comunitario, es preciso adoptar una perspectiva de largo plazo. La comparación entre países revela que aquellos que han implementado programas de turismo rural y comunitario con una perspectiva de mediano y largo plazo tienden a generar impactos más profundos y sostenibles. Tal es el caso de Bolivia, Costa Rica y Paraguay, donde programas con más de 12 años de ejecución han alcanzado impactos significativos en las dimensiones sociocultural, ambiental, económica y de inclusión (Gandolfi y Ramírez, 2025).

Políticas para reducir la vulnerabilidad y promover la inclusión

La reducción de la pobreza y la vulnerabilidad en el mundo rural continúa siendo un desafío central. Las políticas deben centrarse en fortalecer la protección social, promover la inclusión productiva y cerrar las brechas de género y etnicidad que limitan las oportunidades en los territorios rurales.

El fortalecimiento de la protección social es uno de los ejes prioritarios. En la región se consolidaron los programas de transferencias de ingresos, en especial las transferencias condicionadas, vigentes hoy en la mayoría de los países, que contribuyeron a reducir la pobreza y mejorar la educación y la salud infantil. Las pensiones no contributivas también ampliaron la cobertura de los adultos mayores en zonas rurales. Avanzar hacia una protección social más efectiva implica ampliar la suficiencia de los beneficios, asegurar su alcance en territorios aislados y vincularlos con estrategias de inclusión económica.

Las políticas activas de empleo adquieren especial relevancia en los contextos rurales, donde la oferta laboral suele concentrarse en ocupaciones de baja productividad y alta informalidad. Su fortalecimiento es fundamental para diversificar las fuentes de ingreso y generar empleos de mayor calidad. Los programas de capacitación, formación técnica y

reconversión laboral deben adaptarse a las características de los territorios y articularse con los sectores estratégicos identificados en el reporte: la agricultura y la agroindustria; los sectores asociados a la transición energética; y los servicios rurales emergentes (por ejemplo, el turismo, la logística y las actividades ambientales). Integrar la formación y la intermediación laboral con las cadenas de valor de estos sectores permite que los trabajadores rurales participen de nuevas oportunidades productivas y accedan a ocupaciones más estables, formales y con mejores condiciones de protección social. En paralelo, la promoción de la formalización laboral y el cumplimiento de las regulaciones de trabajo decente en ámbitos rurales son condiciones indispensables para mejorar la calidad del empleo y garantizar el acceso efectivo a la protección social.

La educación postsecundaria, especialmente la técnica y profesional, cumple un papel clave para fortalecer las capacidades de los jóvenes rurales y facilitar su inserción en los sectores productivos emergentes. Su expansión y adecuación a las necesidades territoriales pueden impulsar la movilidad social y contribuir a que el capital humano rural participe plenamente en la transformación productiva.

Reducir las brechas de género en el empleo y los ingresos exige políticas que aborden las restricciones vinculadas a la maternidad, los cuidados y la carga de trabajo doméstico. La expansión de servicios de cuidado infantil y educación inicial en entornos rurales, junto con la inversión en infraestructura básica que ahorre tiempo (agua, energía, transporte), permite ampliar la autonomía económica de las mujeres rurales. Los programas de formación técnica con enfoque de género, las acciones afirmativas en sectores tradicionalmente masculinizados y la inclusión financiera son instrumentos clave para potenciar su participación económica. Estas políticas deben

complementarse con campañas de sensibilización orientadas a transformar las normas sociales que reproducen las desigualdades, muy marcadas en entornos rurales.

Finalmente, las políticas habilitadoras, como la mejora de la infraestructura de transporte y conectividad digital, reducen los costos de acceso al empleo y facilitan la movilidad laboral. Invertir en caminos rurales y servicios de transporte público o comunitario e infraestructura digital amplía el rango de oportunidades disponibles para los trabajadores rurales y fortalece la integración territorial.

Políticas para la provisión de servicios de calidad en zonas rurales

Si bien los avances en la cobertura de los servicios han sido significativos en la mayoría de las zonas rurales, persisten desigualdades marcadas en la calidad. Las limitaciones asociadas a la dispersión poblacional, los mayores costos de provisión y la baja rentabilidad privada explican buena parte de estas brechas, que reflejan la necesidad de políticas diferenciadas y coordinadas entre sectores y niveles de gobierno. Avanzar en el cierre de estas brechas y mejorar la calidad de estos servicios requiere una combinación de políticas de inversión pública, innovación institucional y participación comunitaria.

En los sectores de infraestructura básica (agua, saneamiento y electricidad), desde el lado de la oferta, se destacan las estrategias que combinan la expansión de las redes con soluciones descentralizadas adaptadas a territorios dispersos. Desde el lado de la demanda, se precisan políticas que actúen sobre las barreras económicas que afectan las decisiones de los hogares a la hora de realizar la conexión a estos servicios. Esas barreras incluyen los costos de conexión, las tarifas del servicio y su asequibilidad, y las inversiones requeridas en la vivienda. Los instrumentos más efectivos combinan subsidios a la conexión focalizados con diseños tarifarios progresivos que limitan los cargos fijos y protegen un consumo básico. Avances regulatorios en materia de calidad del servicio y su correcta

medición y reporte, así como la creación de capacidades locales para la operación y el mantenimiento, resultan clave para garantizar la calidad en la provisión de los servicios.

En materia de conectividad física y digital, los países han recurrido tanto a la inversión pública directa como a esquemas de asociación público-privada a fin de aprovechar las capacidades del sector privado. Para fortalecer estas asociaciones es fundamental diseñar los contratos adjudicados en licitaciones alineando los incentivos privados con los objetivos de acceso universal, por ejemplo, a través del agrupamiento de contratos o la estipulación de estándares mínimos de calidad en la provisión, como la fijación de una velocidad mínima en el caso del servicio de internet. De manera complementaria, las políticas que promueven el uso compartido de infraestructura pueden reducir costos y acelerar el despliegue de redes de fibra óptica. Finalmente, las tecnologías de conexión con menor requerimiento de redes físicas, como el internet satelital, abren nuevas posibilidades para las zonas remotas, siempre que se implementen políticas que aseguren su asequibilidad para hogares y establecimientos rurales.

En el acceso a los servicios de salud y educación, resulta necesario fortalecer políticas orientadas a reducir las brechas territoriales en disponibilidad,

calidad y complejidad de la oferta. Esto requiere inversiones focalizadas en infraestructura y equipamiento, así como estrategias para ampliar y calificar los recursos humanos, apoyadas en mejoras de la conectividad vial y en el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el acceso a servicios especializados. De manera complementaria, el uso de incentivos financieros y profesionales, junto con mecanismos como campañas de información y de cambios conductuales y esquemas de rotación, puede contribuir a atraer y retener personal calificado en los territorios rurales.

Finalmente, para ampliar el acceso de la población rural a servicios financieros se requiere una combinación coherente de productos flexibles

(calendarios de pago alineados a ciclos productivos, períodos de gracia y garantías adecuadas), innovación tecnológica (billeteras móviles, corresponsales bancarios y plataformas tecnofinancieras interoperables integradas a sistemas de identificación seguros), regulación inclusiva y de protección al consumidor (transparencia de costos, resolución de reclamos, autenticación robusta y enfoque promujer) y fortalecimiento de las capacidades (alfabetización digital y financiera aplicada). La digitalización ya está acercando la oferta a localidades antes desatendidas y reduciendo los costos de transacción, pero su impacto depende de que las personas que la utilizan sepan manejar, comparar y resguardar estos servicios, minimizando los fraudes y el sobreendeudamiento y favoreciendo un uso efectivo, seguro y sostenido.

Instituciones para potenciar el desarrollo rural

El aprovechamiento del potencial de los territorios rurales depende críticamente de contar con instituciones sólidas, capaces de orientar la inversión, coordinar a los actores y regular las transformaciones productivas. Esto requiere cerrar brechas históricas en planificación, gestión territorial, marcos regulatorios, información estadística y capacidades de los gobiernos subnacionales. A la vez, la participación activa de las comunidades locales, los productores y las organizaciones rurales es relevante para asegurar que las inversiones se traduzcan en beneficios sostenibles y equitativos.

Se requieren instituciones capaces de movilizar inversión pública y privada hacia los territorios rurales, cerrando los rezagos en infraestructura vial, digital, eléctrica y social que limitan el desarrollo y la integración territorial. Para que estas inversiones se traduzcan en proyectos efectivos, es clave fortalecer las capacidades de gestión de los gobiernos subnacionales que, especialmente en los países más grandes, son los responsables de la formulación, ejecución y supervisión de estas obras (Alves et al., 2025) y complementar este esfuerzo con la capacitación y el empoderamiento de actores locales.

Un desarrollo rural moderno también exige marcos normativos claros, sistemas de información robustos e integración regional. En territorios donde conviven actividades agrícolas, forestales, energéticas, mineras y turísticas, son cruciales marcos regulatorios coherentes para asegurar que estas transformaciones productivas se desarrollen de manera sostenible, evitando conflictos por los recursos naturales y garantizando estándares ambientales crecientes. En este marco, mecanismos de gobernanza inclusiva que incorporen a comunidades locales, pueblos indígenas y pequeños productores en la toma de decisiones fortalecen la legitimidad de las políticas públicas, contribuyen a una asignación más equitativa de los recursos y reducen los conflictos por el uso del territorio.

Otro aspecto central es cerrar las importantes brechas en los sistemas de información estadística, catastros y datos territoriales. La falta de información sistemática y comparable limita la capacidad de diseñar políticas basadas en evidencia, monitorear desigualdades y evaluar resultados.

Asimismo, la expansión de actividades ilegales, como en la minería, la tala y pesca ilícita y otras actividades económicas criminales asociadas a los recursos naturales, obstaculiza la inversión y la provisión de servicios, genera inseguridad y vulnerabilidad en las comunidades rurales y debilita la gobernanza. Esto exige fortalecer la presencia estatal, la fiscalización ambiental y las capacidades de seguridad. Consolidar estas competencias es indispensable para que los territorios rurales desplieguen plenamente su potencial.

Finalmente, el fortalecimiento institucional debe estar acompañado de una mayor integración regional y cooperación internacional. Muchos de los desafíos y oportunidades del mundo rural, como la transición energética, la seguridad alimentaria, y la sostenibilidad productiva, trascienden fronteras nacionales. La armonización de normas, el intercambio de información, la cooperación técnica y los acuerdos intra regionales pueden reducir costos, mejorar capacidades regulatorias y ampliar oportunidades de desarrollo para los territorios rurales (CEPAL et al., 2024). La integración regional ofrece, además, una plataforma clave para fortalecer la voz de ALC en mercados internacionales cada vez más exigentes.

Referencias

- Adamopoulos, T. (2025). *Geography and agricultural productivity: The case of Latin America and the Caribbean*. Documento de trabajo 2025/04. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2520>
- AIE (2023a). *Latin America energy outlook 2023*. París: Agencia Internacional de Energía. Licencia CC BY 4.0. <https://www.iea.org/reports/latin-america-energy-outlook-2023>
- AIE (2023b). *Net zero roadmap: A global pathway to keep the 1.5 °C goal in reach*. 2023 Update. https://iea.blob.core.windows.net/assets/8ad619b9-17aa-473d-8a2f-4b90846f5c19/NetZeroRoadmap_AGlobalPathwaytoKeepthe1.5CGoalinReach-2023Update.pdf
- AIE (2024). *Renewables 2024. Analysis and forecast to 2030*. Agencia Internacional de la Energía. <https://iea.blob.core.windows.net/assets/17033b62-07a5-4144-8dd0-651cdb6caa24/Renewables2024.pdf>
- AIE (2025). *Global critical minerals outlook 2025*. París: Agencia Internacional de Energía. <https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025>
- Allub, L., Álvarez, F., Alves, G., Cont, W., Juncosa, F. y Odriozola, J. (2024). RED 2024. *Energías renovadas: Transición energética justa para el desarrollo sostenible*. Caracas: CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2248>
- Allub, L., Álvarez, F., Brassiolo, P., Buccari, F., de la Mata, D., Díaz de Astarloa, B., Estrada, R., Fenández Meijide, D., Finkelstein, M., Maljar, M. y Odriozola, J. (2025). *Digitalización e IA: Avances y desafíos sectoriales en América Latina y el Caribe* [en proceso de publicación].
- Alves, G., Brassiolo, P., Buccari, F., Camacho, C., Cifuentes, R., Estrada, R. y Fajardo, G. (2025). RED 2025. *Soluciones cercanas: El papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe*. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2430>
- ASEP (diciembre de 2024). *Estadística del mercado eléctrico panameño*. Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. https://asep.gob.pa/wp-content/uploads/electricidad/estadisticas_mensuales/2024/DICIEMBRE_2024.pdf
- Azavea, ReCAP, TRL y Banco Mundial (2019). *Rural Access Index Measurement Tool* [base de datos]. Consulta realizada el 1 de agosto de 2025. <https://rai.azavea.com/>
- Banco Mundial (2025a). GNI per capita in US\$ (Atlas methodology). *Indicadores del Desarrollo Mundial* [base de datos]. World Bank Analytical Classifications. Consulta realizada el 10 de julio de 2025. <https://ddh-openapi.worldbank.org/resources/DR0095334/download>
- Banco Mundial (2025b). PIB per cápita, PPA (\$ a precios internacionales constantes de 2017). *Indicadores del Desarrollo Mundial* [base de datos]. Consulta realizada el 20 de enero de 2025. <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.PP.KD>

Banco Mundial, DTU, Vortex y ESMAP (2025a). *Global Wind Atlas v. 4.0*. Aplicación gratuita basada en la web, desarrollada, propiedad y operada por la Technical University de Dinamarca (DTU). La versión 4.0 del Global Wind Atlas es divulgada en asociación con el Grupo Banco Mundial, utilizando datos proporcionados por Vortex, usando financiamiento del Programa de Asistencia a la Gestión del Sector de la Energía (ESMAP). Consultado el 14 de noviembre de 2025. <https://globalwindatlas.info>

Banco Mundial, Solargis y ESMAP (2025b). *Global Solar Atlas v. 2.0*. Aplicación basada en la web, desarrollada y operada por la compañía Solargis S.R.O., en nombre del Grupo Banco Mundial, utilizando datos de Solargis y con financiamiento del Programa de Gestión del Sector de Energía (ESMAP). Consultado el 14 de noviembre de 2025. <https://globalsolaratlas.info/map?c=12.726084,-23.027344,2>

Barnes, J. y de la Mata, D. (2025). *Dinámicas demográficas en el continuo rural-urbano de América Latina y el Caribe*. Documento de trabajo. CAF [en proceso de publicación].

Buccari, F., Martínez Villa, L. y Rosá, T. (2025). *Mapping accessibility gaps across Latin America and the Caribbean*. Documento de trabajo. CAF [en proceso de publicación].

Byerlee, D. R., De Janvry, A. F., Sadoulet, E., Townsend, R. y Klytchnikova, I. (2008). *World development report 2008: Agriculture for development*. Washington, D. C.: Banco Mundial. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/587251468175472382>

CAF (2025). *Base de Datos de Gobiernos Locales y Regionales en América Latina y el Caribe* [base de datos]. Consulta realizada el 7 de julio de 2025. <https://atlasgobiernoslocales.caf.com/es/acerca-de>

CEDLAS (2025). *Indicadores socioeconómicos desagregados para zonas rurales y urbanas de América Latina y el Caribe*. Cómputos basados en microdatos de encuestas de hogares armonizadas de los proyectos SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial), LABLAC (CEDLAS y Banco Mundial) y GenLAC (CEDLAS).

Celade-División de la Población de CEPAL y DPNU (2024). Estimaciones y proyecciones de la población: Revisión 2024. *Estimaciones y proyecciones: Archivos Excel* [base de datos]. Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía-División de Población de la CEPAL y División de Población de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Consulta realizada el 6 de septiembre de 2025. <https://www.cepal.org/es/pagina/estimaciones-proyecciones-archivos-excel>

Celade-División de Población de la CEPAL (s. f.). *Base de Datos de Migración Interna en América Latina y el Caribe (MIALC)* [base de datos]. Consulta realizada el 30 de junio de 2025. <https://celade.cepal.org/bdcelade/mialc/>

CEPAL (2023). *Extracción e industrialización del litio: Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48964-extraccion-industrializacion-litio-oportunidades-desafios-america-latina-caribe>

CEPAL (2025). *Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe* [en línea]. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Consulta realizada el 5 de septiembre de 2025. <https://dds.cepal.org/bpsnc/inicio>

CEPAL, FAO e IICA (2024). *Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe 2023-2024*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/69183-perspectivas-la-agricultura-desarrollo-rural-america-mirada-america-latina>

Comisión Europea, FAO, ONU-Hábitat, OCDE y Banco Mundial (2024). *Aplicación del grado de urbanización: Manual metodológico para definir ciudades, localidades y zonas rurales para comparaciones internacionales*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f252a896-es>

De Janvry, A., Emerick, K., González-Navarro, M. y Sadoulet, E. (2015). Delinking land rights from land use: Certification and migration in Mexico. *American Economic Review*, 105(10), 3125-3149.

DEIS (2025). *GES* [base de datos]. Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Consulta realizada el 9 de octubre de 2025. <https://deis.minsal.cl>

FAO (2021). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020: Informe principal*. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://doi.org/10.4060/ca9825es>

FAO (2024a) (con amplio procesamiento realizado por Our World in Data). Area of planted forest–UN FAO [dataset]. *Land, inputs and sustainability: Land use* [datos originales]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 30 de junio de 2025. <https://ourworldindata.org/grapher/forest-area-primary-planted?overlay=sources>

FAO (2024b). *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2024: La transformación azul en acción*. Roma. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://doi.org/10.4060/cd0683es>

FAO (2025a). Datos estructurales provenientes de censos agrícolas. *FAOSTAT* [base de datos]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 7 de enero de 2025. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/WCAD>

FAO (2025b). Indicadores de empleo: Agricultura y sistemas agroalimentarios. *FAOSTAT* [base de datos]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 5 de noviembre de 2024. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/OEA>

FAO (2025c). Indicadores macro. *FAOSTAT* [base de datos]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 20 de enero de 2025. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/MK>

FAO (2025d). Reserva de capital. *FAOSTAT* [base de datos]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 24 de septiembre de 2025. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/CS>

FAO (2025e). Uso de la tierra. *FAOSTAT* [base de datos]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 15 de enero de 2025. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/RL>

FAO (2025f) (con procesamiento realizado por Our World in Data). Renewable freshwater resources per capita. *AQUASTAT* [base de datos de FAO, vía Banco Mundial]. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consulta realizada el 27 de octubre de 2025. <https://ourworldindata.org/grapher/renewable-water-resources-per-capita>

Frisancho, V. y Valdivia, M. (2024). *Savings groups in rural settings: Impacts on household well-being, female empowerment, and access to formal credit*. https://veronicafrisancho.net/wp-content/uploads/2024/11/vsla_peru.pdf

Gandolfi, M. y Ramírez, P. (2025). *Programas públicos de turismo rural y comunitario en América Latina y el Caribe. Evolución, impactos y recomendaciones para la implementación*. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2523>

- JMP (2025). *Joint Monitoring Programme. Household Data* [serie de datos]. Programa Conjunto OMS/Unicef de Monitoreo del Abastecimiento del Agua, el Saneamiento y la Higiene. <https://washdata.org/data/household#!/>
- Klinger, B., Khwaja, A. y LaMonte, J. (2013). *Improving credit risk analysis with psychometrics in Peru*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0009139>
- Kruse, H., Mensah, E., Sen, K. y de Vries, G. J. (2022). A manufacturing renaissance? Industrialization trends in the developing world. *IMF Economic*. <http://doi.org/10.1057/s41308-022-00183-7>
- Lagakos, D. (2020). Urban-rural gaps in the developing world: Does internal migration offer opportunities? *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 174-192. <https://doi.org/10.1257/jep.34.3.174>
- Lagos, G., Peters, D. y Castro, L. (2022). *Desafíos y oportunidades que el cambio climático y la protección del medio ambiente y de la biodiversidad implican para el desarrollo sostenible de América Latina. Los casos del cobre y del litio*. Documento de trabajo de CAF [manuscrito inédito].
- López, A., Obaya, M., Pascuini, P. y Ramos, A. (2019). *Litio en la Argentina: Oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor*. Banco Interamericano de Desarrollo. <https://doi.org/10.18235/0001553>
- Maloney, W., Meléndez, M. y Morales, R. (2025). *Organized crime and violence in Latin America and the Caribbean*. En W. Maloney, M. Meléndez y R. Morales, *Latin America and the Caribbean Economic Review*. Washington, D. C.: Banco Mundial. <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/3b53fe47-e238-40e9-97dc-7be3d3624053/content>
- Marchionni, M., Pedrazzi, J. P. y Pinto, M. F. (2025). *Women, motherhood, and structural transformation. insights from rural Latin America*. Documento de trabajo 2025/07. CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/2524>
- Martínez Villa, L. y Rosá, T. (2025). *Rural migration in Latin America and the Caribbean: Patterns, drivers, and implications*. CAF [en proceso de publicación].
- Mengede, K. (2025). *AI levels the field: Kenyan farmers get smarter access to credit*. Digital Global. <https://www.bmz-digital.global/en/news/ai-levels-the-field-kenyan-farmers-get-smarter-access-to-credit/>
- Ocampo, J. A. (2017). Commodity-led development in Latin America. En *Alternative pathways to sustainable development: Lessons from Latin America*. En G. Carbonnier, H. Campodónico y S. Tezanos Vázquez (eds.), *Alternative pathways to sustainable development: Lessons from Latin America*, (pp. 51-76). Brill. https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/37966/9789004351677_webready_content_text.pdf?sequence=1#page=74
- OOKLA (s. f.). *Speedtest by Ookla Global Fixed and Mobile Network Performance Map Tiles* [base de datos]. Consulta realizada el 1 de julio de 2025. <https://github.com/teamookla/ookla-open-data>
- Ritchie, H. y Rosado, P. (2024). *Metals and minerals*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/metals-minerals>
- Rodríguez Vignoli, J. (2017). Efectos de la migración interna sobre el sistema de asentamientos humanos de América Latina y el Caribe. *Revista de la CEPAL*, 2017(123), 7-34. <https://doi.org/10.18356/3cfb9b84-es>
- Schiavina, M., Melchiorri, M. y Freire, S. (2023). *GHS-DUC R2023A - GHS Degree of Urbanisation Classification, application of the Degree of Urbanisation methodology (stage II) to GADM 4.1 layer, multitemporal (1975-2030)* [base de datos]. Comisión Europea, Centro Común de Investigación (JRC). <https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/dc0eb21d-472c-4f5a-8846-823c50836305>

UNCTAD (2025a). Merchandise: Intra-trade and extra-trade of country groups by product, annual (analytical). *UNCTAD Data Hub* [base de datos]. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Consulta realizada el 25 de marzo de 2025. <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.IntraTrade>

UNCTAD (2025b). Merchandise trade matrix, annual (analytical). *UNCTAD Data Hub* [base de datos]. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Consulta realizada el 9 de noviembre de 2025. <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.TradeMatrix>

UNDESA (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*. Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, División de Población. Consulta realizada el 22 de junio de 2025. <https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210043144>

URSEA (2025). *Informe de calidad de servicio de distribución de energía eléctrica*. Unidad Reguladora de los servicios de Energía y Agua. Uruguay. <https://www.gub.uy/unidad-reguladora-servicios-energia-agua/comunicacion/publicaciones/informe-calidad-servicio-distribucion-energia-electrica/informe-calidad>

USDA (2025). TFP indices and components for countries, regions, countries grouped by income level, and the world, 1961–2022. *International Agricultural Productivity* [base de datos]. United States Department for Agriculture [Departamento de Agricultura de Estados Unidos]. Consulta realizada el 2 de mayo de 2025. <https://www.ers.usda.gov/data-products/international-agricultural-productivity>

USGS (2024). *Mineral commodity summaries*. U.S. Geological Survey [Servicio Geológico de Estados Unidos]. <https://doi.org/10.3133/mcs2024>

Valencia, A., Navas, R., y Valdivia Llerena, D. (2025). *América Latina y el Caribe, a la vanguardia del progreso energético y tecnológico*. Blog Negocios Sostenibles. BID Invest. <https://www.idbinvest.org/es/blog/energia/america-latina-y-el-caribe-la-vanguardia-del-progreso-energetico-y-tecnologico>

Reporte de Economía y Desarrollo

Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe

La elaboración del Reporte de Economía y Desarrollo (RED) es responsabilidad de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas (DIS) de la Gerencia de Conocimiento de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-. La edición y coordinación general de esta entrega estuvo a cargo de Dolores de la Mata y Juan Odriozola, con el apoyo de Belén Cañuelo. Ana Gerez realizó la revisión editorial y corrección de estilo.

La redacción del reporte fue responsabilidad de los siguientes investigadores:

Capítulo 1 Dolores de la Mata y Juan Odriozola

Capítulo 2 Lian Allub

Capítulo 3 Lian Allub y Manuel Toledo

Capítulo 4 Juan Odriozola

Capítulo 5 Guillermo Cabral y Juan Odriozola

Capítulo 6 Dolores de la Mata y Tatiana Rosá

Capítulo 7 Dolores de la Mata y Mariana Marchionni

Capítulo 8 Florencia Buccari y Tatiana Rosá

En América Latina y el Caribe, las áreas rurales atraviesan un proceso de transformación profunda. Más allá de su tradicional vinculación con la producción primaria, concentran hoy un potencial estratégico para el desarrollo económico, la provisión de bienes esenciales, la sostenibilidad ambiental y la conservación cultural, en un contexto marcado por la transición energética, el cambio climático y la reconfiguración de las cadenas de valor globales. Al mismo tiempo, enfrentan desafíos persistentes en ingresos de los hogares, acceso a servicios, infraestructura y capacidades productivas, que limitan su contribución al crecimiento y a la reducción de la desigualdad en la región.

Este nuevo Reporte de Economía y Desarrollo examina el papel del mundo rural como motor del desarrollo regional desde una mirada integral que articula población, mercados laborales, sistemas productivos y servicios e infraestructura. En este marco, el reporte caracteriza la estructura productiva y laboral de los territorios rurales, así como las condiciones de vida de sus hogares. Asimismo, identifica las brechas persistentes en el acceso a servicios e infraestructura que condicionan su desarrollo. Sobre esta base, analiza las oportunidades para elevar la productividad y promover la diversificación en sectores clave como el agro y la agroindustria, la minería y la energía, el turismo, el sector forestal, la pesca y la acuicultura, así como los desafíos asociados a la transición energética y a la creciente demanda global por bienes primarios sostenibles.

El reporte identifica los principales cuellos de botella que enfrentan los territorios rurales para desplegar su potencial, entre los que se destacan las brechas de productividad, la informalidad laboral, las limitaciones en conectividad física y digital, el acceso desigual a servicios esenciales y financieros, y los desafíos vinculados a la sostenibilidad ambiental y al cambio climático. A partir de este diagnóstico, propone un conjunto de políticas orientadas a fortalecer las capacidades productivas y humanas, mejorar la integración territorial y promover un desarrollo rural más inclusivo, dinámico y sostenible, capaz de ampliar las oportunidades y el bienestar de las personas y comunidades de la región. En este sentido, el reporte subraya que el desarrollo rural se presenta como una oportunidad estratégica que demanda políticas públicas integradas para aprovechar las transformaciones en curso y cerrar brechas históricas.